

Sombra de la mafia: El desplazamiento

Tabla de contenido

Los desplazados	3
La Nueva Cara del Desplazamiento Forzado	12
Desplazar para no ser desplazado	14
1. Todo el mundo desplaza a todo el mundo	16
2. El lugar en movimiento: un contexto.....	17
3. La comunidad que ya no existe	18
4. Petén no es una selva	22
5. Una planta en todas partes.....	23
6. Claustrofobia entre la palma	24
7. Las empresas de palma africana	26
8. La pugna está por iniciar entre todos los bandos.....	26
9. Un área de inversión	29
10. Apenas algo de turbulencia.....	31
La legión de los desplazados	32
La estampida del miedo en la frontera colombo-venezolana	49
La gente sigue huyendo:	50
El desplazamiento forzado por el crimen	53

Los desplazados

Por Francisco Sandoval Alarcón



De septiembre de 2011 a febrero de 2012, cientos de familias huyeron de la Sierra de Sinaloa luego que células del narco asesinaran a lugareños y quemaran casas. A casi un año del éxodo, los pueblos continúan abandonados.

Jorge tenía las manos embarradas de masa cuando escuchó los disparos que acabaron con la vida de su vecino Juan.

Estaba preparando las tortillas del desayuno cuando se percató de aquellos disparos y los gritos de amenaza. Tenía miedo pero se mantuvo sereno. Así lo vieron aquel fin de semana de septiembre de 2011 los integrantes de su familia cuando les pidió que juntaran algunas pertenencias porque se marcharían de San José de los Hornos, pueblo localizado en el “Triángulo Dorado” de México, como se le conoce a esa franja compuesta por las regiones de Sinaloa, Durango y Chihuahua, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental.

Jorge se detuvo un momento para pensar lo que debía hacer. Fue así que comenzó a recolectar víveres, encendió el motor de la camioneta pick-up y llamó por celular a sus amigos de Ocurague para advertirles que los pistoleros se dirigían hacia aquel pueblo vecino.

—Son 30 y van armados. Mataron a Juan y van para allá. Mejor váyanse— dijo.

En San José los Hornos hay cerca de 100 casas distribuidas en tres caminos agrestes. La tierra de los alrededores está rodeada de pinos y las colinas que la bordean resaltan la belleza natural del pueblo. En el camino principal, de unos cinco metros de ancho, se encuentran asentadas las casas más vistosas, como una color amarillo con una pequeña cúpula en el techo, que hace 10 meses fue quemada por un grupo de pistoleros (gavilleros les llaman en Sinaloa).

Jorge y sus vecinos intuyeron que a diferencia de los homicidios ocurridos en los últimos cuatro años, en esta ocasión la intensión era intimidar a todos, así no tuvieran injerencia en la siembra o transporte de drogas, rompiendo el “orden” que

hasta ese momento se vivía y que consistía en respetar los rangos de las personas vinculadas con el negocio y las que no tenían ningún tipo de relación con las actividades delictivas.

Ese mismo día Jorge con su familia y otras 100 familias más, abandonaron el pueblo. Para el gobierno mexicano el desplazamiento forzado por violencia parece no existir, a pesar que se trata de un fenómeno persistente. Cuando en el 2011 el Consejo Noruego para Refugiados, publicó un informe que estimaba que en los últimos 10 años México había registrado el desplazamiento de poco más de 160.000 personas por diferentes motivos, entre ellos la violencia, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, minimizó la cifra argumentando que desconocían la metodología del estudio. —No se tienen suficientes datos ni se tiene realmente los elementos para poder determinar si realmente está sucediendo un fenómeno de esa naturaleza que formalmente tuviera que estar atendiendo el Estado Mexicano. Esa es la posición del gobierno como tal— dijo Max Alberto Diener Sala, subsecretario de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuando se le preguntó sobre este problema.

Esa falta de reconocimiento oficial, ha impedido que organismos como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), pueda tener una estrategia para enfrentar el fenómeno. —Es muy preocupante desde la perspectiva de las personas afectadas, pues en la práctica lo que significa es que estas víctimas no reciben atención adecuada porque el Gobierno no los reconoce, y porque además bloquea a que otros organismos, como el ACNUR, hagan un trabajo— dice Sebastián Albuja, representante del Observatorio del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados, quien comenta que las autoridades mexicanas están obligadas a elaborar un estudio a nivel nacional que permita tener una idea exacta de la magnitud del desplazamiento forzado, como el que pretende impulsar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en palabras del Quinto Visitador, Fernando Batista, busca influir en la política pública y en un reconocimiento oficial del problema.

Jorge es un hombre de sonrisa alegre. Nació y creció en San José de los Hornos. Al igual que sus padres, se ha dedicado a la siembra de maíz y frijol, así como a la crianza de ganado.

Su identidad, como la de algunas personas que aparecen en la historia, se cambió a petición de los entrevistados.

—Hasta hace cuatro años vivíamos muy tranquilos, nadie nos molestaba. La gente que se dedicaba a la siembra de goma (amapola) y marihuana, la podía vender

libremente. El ejército venía regularmente, hacía decomisos, pero se iba. A los que no nos dedicábamos a ese negocio no nos decían nada, nos dejaban tranquilos— dice Jorge sentado en la cocina de su nueva casa, mientras encima de la fogonera hierve una olla de frijoles que serán su desayuno.

El pueblo donde nació Jorge, forma parte de una red de 13 comunidades serranas en Sinaloa localizadas en el “Triángulo Dorado”, justo en los límites de los municipios de Sinaloa de Leyva y Badiraguato. Hasta finales del siglo XIX los pobladores de esas comunidades se dedicaban exclusivamente al cultivo de maíz, frijol, manzana, chabacano, higo y cítricos. Además trabajaban en la minería. Fue hasta 1905, con el cierre de la casa de moneda en Culiacán y la crisis que se vivió por aquellos años, lo que empujó a cientos de familias a cultivar amapola, planta que llegó a Sinaloa con la comunidad China asentada ahí desde 1885. Fueron los chinos los que trajeron la semilla a México para sembrarla y consumirla con fines recreativos. La crisis financiera local y la demanda que tenía la planta (ya transformada en goma de opio y procesada en heroína) en Estados Unidos, la convirtieron en menos de tres décadas, en un negocio muy redituable donde las autoridades locales y federales se beneficiaban abiertamente con sus ganancias. — Lo hicieron para aliviar los dolores de los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial— dice Eleuterio Ríos Espinoza, ex diputado de Badiraguato y dos veces Secretario de Gobierno en el Estado, uno de los sinaloenses que, a sus 76 años de edad, conoce mejor que nadie la dinámica que se ha dado en esa región serrana durante el último siglo. Autor del libro: “Sinaloa, sociedad y violencia”, publicado en 1991, sostiene la hipótesis (no compartida por otros estudiosos del tema que le atribuyen este auge exclusivamente a los chinos), que el “boom” de la producción de amapola y marihuana en Sinaloa se dio por la intervención de Estados Unidos en la década de 1910. Lo que es un hecho es que en la actualidad, Estados Unidos tiene en México a uno de sus principales proveedores de heroína para uso recreativo. Hace poco más de un año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe en el que mostró su preocupación por el incremento de sembradíos de amapola en México y el crecimiento de consumidores de heroína mexicana en Estados Unidos.

Hasta antes de 2008, es decir a un siglo del auge del cultivo de amapola en la Sierra de Sinaloa, eran comunidades donde se vivía prósperamente. Casi todas las familias eran dueñas de una camioneta o una cuatrimoto, que en el mercado se cotizan hasta en US\$4.000. Además, la mayoría de las viviendas contaban con televisión satelital. Eran comunidades que mantenían una tensa calma con los narcotraficantes dedicados a su negocio sin intervenir en la rutina diaria del pueblo. La siembra de droga, le inyectaba recursos a la economía local generando una burbuja de bonanza donde todos se beneficiaban directamente o indirectamente. En el caso de los lugareños que no sembraban droga, no eran

molestados por las personas que sí lo hacían. Todos convivían en aparente paz y no había conflictos importantes, aparte de los asesinatos aislados por ajuste de cuentas entre bandas y los decomisos esporádicos del ejército, que en los últimos 10 años habían convertido a este “triángulo” territorial en la región con mayor número de plantíos de marihuana destruidos en el país. La altura del terreno (1.200 a 2.000 metros por encima del nivel del mar) favorece estos cultivos, tanto así que por cada cien hectáreas encontradas por el Ejército, 60 provenían de los estados que conforman el “Triángulo”, que la convierten en una zona dependiente de esa actividad, donde no sólo hay personas que la siembran, sino también quienes se encargan de cuidar los sembradíos, recogerlos, transportarlos y venderlos a los cárteles del narcotráfico.

Aquel día en que Jorge decidió abandonar su finca, justo cuando conducía su camioneta, observó por el espejo retrovisor que otras familias del pueblo lo seguían. Como él, decidieron huir de San José los Hornos aquel sábado 24 de septiembre de 2011. Kilómetros más adelante, cuando ya se encontraba fuera de la colina donde están asentados los pueblos, observó que los pistoleros incendiaron varias casas en Ocurague.

Después se enteraría que se trataba del mismo grupo de sicarios que semanas atrás había asesinado a Fabián, otro habitante de San José de los Hornos. Luego de cometer el crimen de este hombre, los responsables incendiaron su casa, la de la cúpula en el techo. También quemaron la tienda de abarrotes y dos viviendas más. Antes de marcharse, amenazaron a todos en la comunidad con asesinarlos en caso de resistirse a trabajar para ellos.

El asesinato de su vecino Juan, quien tenía varios años desligado del negocio, sólo vino a confirmar las sospechas de que los pistoleros pretendían intimidarlos. Al escuchar los disparos dedujeron que su muerte fue una especie de ultimátum.

La necropsia practicada a Juan arrojó que su cuerpo presentaba huellas de tortura y 40 orificios de bala. Hay quienes sostienen que a Juan lo torturaron toda la noche. Por la mañana, con una soga amarrada al cuello, lo arrastraron varios metros por un camino de terracería. Agonizante le descargaron las balas de sus rifles.

—Son puros plebes (muchachos) de 15 a 20 años. Los traen de Juárez y Navolato. Algunos trabajan para los Beltrán, otros para el Cartel de Juárez y Los Zetas— platica Jorge después de darle un sorbo a su taza de café y recordar que a estos jóvenes pistoleros los comenzaron a ver desde 2008.

Hasta antes del asesinato de Juan, a ese grupo le atribuían 11 asesinatos en la zona. El móvil casi en todos los casos: acabar con los operadores de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien además de haber nacido en el pueblo de La Tuna, Badiraguato —500 metros cuesta abajo de San José de los Hornos—, es el narcotraficante más buscado de México y el continente. Por información que lleve a su captura, Estados Unidos ofrece US\$7 millones. Es, de acuerdo con la lista de la revista estadounidense Forbes, uno de los hombres más ricos del planeta con una fortuna calculada en más de US\$1.000 millones. En el plano criminal, es el narcotraficante mexicano con más enemigos dentro del mundo de los cárteles de la droga. Prueba de ello es la rivalidad que sostiene con la organización que fundaron los hermanos Beltrán Leyva, que hasta principios de 2008 trabajaban como una mega organización de la droga.

Los jefes de estos grupos comenzaron sembrando marihuana y amapola de manera independiente al igual que muchos pobladores del “Triángulo”, pero la captura y el asesinato de los capos que controlaban el tráfico y la distribución de las drogas, aunado a sus ambiciones personales, los llevaron a convertirse en una especie de “federación del narcotráfico”, les llamaban las autoridades en Estados Unidos hasta donde han extendido el negocio.

Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México, la rivalidad entre la organización de “El Chapo” y los “Beltrán” surgió a principios de 2008 tras el encarcelamiento de Alfredo Beltrán Leyva. La captura del narcotraficante, “generó la pérdida de confianza” entre ambos grupos, transformándose en “una espiral de violencia en Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y partes de Jalisco y Guerrero”. En dos años de rivalidad, se les atribuían el 26 por ciento de los homicidios ocurridos en el país desde que el gobierno mexicano le declaró la “guerra” al narco en diciembre de 2006.

Tras la ruptura de “El Chapo” con sus antiguos socios, los Beltrán se aliaron con los Zetas y con el Cartel de Juárez, con quienes conformaron grupos de sicarios para enfrentar a operadores de Guzmán en su territorio. Lo anterior generó que el “Chapo” aplicara el mismo método en las comunidades controladas por sus enemigos. La violencia que vivió San José de los Hornos, se ha repetido por espacios de tres años en por los menos 60 pueblos del “Triángulo Dorado”, cuyos habitantes huyeron por la rivalidad existente entre los grupos criminales. Tanto en pueblos serranos de Sinaloa, Durango y Chihuahua se han registrado asesinatos y desplazamientos de comunidades enteras por esas pugnas.

Tuvieron que pasar ocho meses desde el desplazamiento de Jorge y su familia para que el gobernador sinaloense, Mario López, reconociera públicamente que en la

zona serrana del Estado, existen comunidades abandonadas por la violencia. Lo hizo el 14 de mayo de 2012, cuando recorrió en helicóptero algunos pueblos abandonados y se reunió con familias de desplazados.

En la reunión el gobernador escuchó las historias de los desplazados. Ahí los afectados expresaron sus razones para salirse de sus pueblos y le describieron el miedo que tenían de ser asesinados en caso de regresar. Tres personas que estuvieron en el encuentro, aseguran que en una parte de la plática el gobernador los “regañó”. Les reclamó el silencio que habían guardado por años al solapar la siembra de drogas, pero finalmente se comprometió a incrementar la vigilancia en la Sierra del Estado. —Lo haremos con el apoyo del ejército y la policía estatal— dijo.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa difundió, una semana después de la visita del gobernador, un padrón de comunidades “desplazadas” en la Sierra. En el documento de dos cuartillas, reconocen el desplazamiento de 1.203 familias sólo en Sinaloa. Se desplazaron “de sus lugares de origen por diversas causas, como la sequía, la búsqueda de alternativas de estudio para sus hijos, mejores opciones de ingreso, o a raíz de la inseguridad”. Estas familias habitaban 65 comunidades serranas pertenecientes a siete municipios sinaloenses. Se trata de un promedio de 5.000 personas desplazadas, si se toma en cuenta cada familia está compuesta por cuatro integrantes. —Que la autoridad minimice el tema de los desplazados por la violencia diciendo que son por sequía o que son menos, evidencia su falta de voluntad para implementar una política emergente que atienda el problema— asegura Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, una de las voces críticas sobre el desplazamiento forzado que se ha dado en la zona serrana del estado.

Sentado frente al escritorio de su oficina, donde hay apilados documentos y oficios por firmar, Aguirre platica que de acuerdo con sus propias estimaciones pudieran existir entre 25.000 y 30.000 desplazados en el estado, sin contar los de Chihuahua y Durango. —Es un cálculo, porque en estos momentos ningún organismo o dependencia cuenta con algún estudio certero o fundamentado que nos permita saber qué está ocurriendo en Sinaloa. Lo que si sabemos, es que el gobierno actúa erróneamente al prometer la presencia del ejército, porque no es con soldados como vas a generar, a mediano y corto plazo, paz y tranquilidad en las zonas afectadas.

—Quisiera volver con mi familia pero tengo miedo de que los plebes regresen y nos asesinen— comenta Jorge quien tras su desayuno se alista, junto a otros hombres

desplazados, para regresar a San José los Hornos y a otros pueblos abandonados del “Triángulo Dorado”, para constatar en qué condiciones se encuentran sus tierras de siembra.

Para llegar a San José y los pueblos que lo rodean, una ruta es salir de Surutato. Se trata de un pueblo situado a 1.460 metros de altitud, fundado en los primeros años de 1800, casi a la par de la Independencia mexicana. A decir de autoridades locales, es en la actualidad una de las comunidades que ha logrado mantenerse al margen del negocio de las drogas por la implementación de proyectos exitosos de cultivo, como son la siembra de chiles y tomates de granja. Es justo ahí, donde poco más de 400 personas de comunidades que conforman el “Triángulo Dorado”, bajaron para refugiarse por la violencia registrada en la última semana de septiembre de 2011. Jorge y compañía siguen la ruta de Surutato para llegar a sus pueblos. Durante el trayecto, que se prolonga por más de una hora, se dan cuenta que el paraje se encuentra despejado de sicarios. Por precaución conducen a menos de 20 kilómetros por hora, pues cualquier derrape puede sacarlos de la vereda y llevarlos hasta el fondo de alguna barranca, que en ese lugar abundan. El trayecto está bordeado de pinos y el aire que se respira es limpio. En algunas curvas, se pueden apreciar los riscos de las montañas que bordean la Sierra Madre Occidental. Todo el trayecto es verde y mientras más se avanza, el frío provoca ganas de abrigarse. En ningún momento se observa presencia terrestre de policías o militares. En el cielo, dos helicópteros del ejército sobrevuelan el lugar. —Son los que fumigan los sembradíos de marihuana— comenta uno de los visitantes, justo en el momento en que Jorge detiene la pick-up frente a la casa que era de Fabián, otro vecino asesinado.

La vivienda se encuentra resumida a muebles y paredes quemadas. En la que era la sala, hay fotografías familiares regadas por todo el piso. En la cochera, una camioneta calcinada se encuentra estacionada en uno de los cajones. En la casa contigua, balearon la fachada. Si no fuera por un grupo de vacas y mulas que caminan sin rumbo fijo, se podría decir que San José los Hornos es un pueblo fantasma. Ocasionalmente las bestias resoplan ante la presencia de quienes solían ser sus amos. Nada queda del resplandor de aquel pueblo que los fines de semana solía ser muy bullicioso. Con niños jugando en los patios y motos circulando regularmente por la calle principal.

En Ocurague, pueblo situado a 10 minutos de San José de los Hornos, la postal es similar. La diferencia es que ahí sí queda alguna gente. Cuando Jorge y comitiva llegaron, dos hombres jóvenes a bordo de una camioneta, los recibieron con familiaridad. Se trata de dos jefes de familia que decidieron quedarse a proteger sus pertenencias. Estos dos hombres, a su vez, forman parte de un grupo más numeroso de personas que cuida de otras comunidades abandonadas. Gracias a esa

vigilancia, han evitado nuevas incursiones violentas. Por cuestiones de seguridad, los vigilantes no revelan los nombres de los pueblos bajo su resguardo, pero aseguran que son la mitad de ellos.

Luego de saludarse e intercambiar comentarios sobre la situación de sus familias, los recién llegados bajan de la camioneta una hielera cargada de cervezas. Mientras destapan la primera ronda, uno de los vigilantes les pide que regresen a cuidar los pueblos.

—Es necesario que regresen. Ahora es cuando debemos demostrar que estamos bien puestos. Que no vamos a dejar que se queden con las tierras —dice mientras los integrantes del grupo le dan un trago a sus respectivas cervezas.

—La gente tiene miedo, creen que todavía no es momento— responde uno de los visitantes.

—Esa es la única manera para proteger los pueblos y demostrar que no nos vamos a dejar— insiste el vigilante, mientras Jorge escuchaba atento la conversación.

Dos meses después de la visita a San José y Ocurague, la mayoría de los pueblos seguían abandonados. Ni policías, ni militares, patrullaban la zona por tierra. —Nosotros no tenemos información de pueblos abandonados— respondió un alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuando Animal Político solicitó una entrevista para hablar del desplazamiento forzado que se está dando en la sierra de Sinaloa y otros estados productores de droga en el país como Michoacán, donde también se han reportado desplazamientos en comunidades donde se siembra amapola y marihuana. Si bien el ejército dice no tener información de ese fenómeno, lo cierto es que desde hace más de 3 décadas han implementado operativos para la erradicación de drogas, consistente en sobrevuelos y destrucción de sembradíos. —Es un conflicto tiene que ver con el vacío de poder que se vive en la zona serrana del estado— dice Marco Santos, jefe de información del Periódico Noroeste en Sinaloa, quien comenta que los lugareños de la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua no son los únicos que han tenido que huir de sus comunidades por la violencia. Hay casos de familias de empresarios y políticos que ante los secuestros, extorsiones, balaceras y asesinatos ocurridos en las principales ciudades de Sinaloa, se han tenido que ir al extranjero o a otros estados. —Se trata del Jet Set de la política— agrega Santos.

Jorge regresa a su casa al atardecer. Antes de salir de Ocurague, uno de los vecinos le pidió ayuda para sacar algunas pertenencias, así que no tuvo más remedio que

cargar muebles, trastes, láminas y cajas. Aun así, dice no sentirse agotado. — Cansancio el que sientes cuando tienes que remover la tierra para abrir surcos— comenta sin perder esa alegría que suele caracterizar a la gente en la Sierra de Sinaloa.

Antes de llegar a su nueva casa, compartida con otras familias desplazadas, un perro sale al paso de Jorge para recibirlo. El animal desconfía por la apariencia de su amo, quien de pies a cabeza se encuentra cubierto por una gruesa capa de tierra. Dentro de la vivienda, las familias esperan a Jorge. Adultos y niños quieren escuchar las noticias sobre la situación de sus pueblos. Cuando lo ven cruzar por la puerta de la cocina, comienzan a bombardearlo con preguntas relacionadas con sus bienes. Jorge les explica que no se han presentado nuevas incursiones y que sus bienes se encuentran a salvo “por el momento”. Después, entre los adultos, comienza una plática que se centra en tres puntos: La temporada de lluvia que está por venir, el estado en que se encuentran sus tierras y la escasez de víveres. Sobre el primer tema, acuerdan tomar una decisión, lo antes posible, sobre si deben o no regresar a sus pueblos para sembrar ante la llegada de la nueva temporada de lluvia. Luego coinciden sobre el buen estado en que se deben encontrar sus tierras. Finalmente, hablan de la necesidad de conseguir más alimentos, pues las despensas que autoridades municipales y el párroco de la iglesia les entregaron, están por terminarse.

Jorge toma una ducha. Su semblante parece más relajado tras el viaje. Es más, luce contento y sonríe. Juega un rato con su perro y con los bulliciosos chiquillos que se encuentran corriendo por el patio de la casa. Por un momento le pasa por la cabeza regresar al pueblo, pero cae en cuenta que es imposible. Sabe mejor que nadie que no hay condiciones de retornar en paz, que la autoridad no ha cumplido con su palabra de vigilar y que los “gavilleros” siguen incursionando regularmente a la zona. —Regresar ahí sería un suicidio— dice Jorge casi en murmullo, mientras los niños corren detrás de una vieja pelota de trapo y los adultos discuten si es conveniente el regreso a San José de los Hornos.

En junio de 2012, dos semanas después de la visita que hiciera Jorge y otros miembros de la comunidad a San José de los Hornos, cinco integrantes de una familia fueron asesinados en ese pueblo. A tres de ellos, padre, madre e hijo de 17 años, les dispararon el sábado 16 de junio cuando regresaron para ver en qué condiciones se encontraban sus bienes. Las otras dos víctimas, eran sobrinos de los primeros, quienes tres días después de los homicidios volvieron por venganza. En ambos casos, la autoridad estatal —que en palabras del gobernador sinaloense reforzaría la vigilancia con policías y militares— se enteró de los crímenes cuatro días después cuando ya se estaban velando los cuerpos.

La Nueva Cara del Desplazamiento Forzado

Por Sibylla Brodzinsky



El desplazamiento forzado tiene una larga historia en América Latina. Durante décadas -- y en algunos países hasta siglos -- poblaciones enteras, grupos familiares e individuos han huido de sus tierras, casas y pueblos, buscando refugio en la ciudad más cercana o el país vecino del fuego cruzado entre dos bandos, o de fuerzas que amenazaban sus vidas.

Hoy en día millones de latinoamericanos están sujetos a diario a una violencia armada, organizada y perversa. Escapando de eso, cientos de miles de ciudadanos huyen. El crimen organizado – que toma la forma de grandes carteles de la droga, pandillas urbanas, narcos locales, y ejércitos privados – es la nueva fuente del desplazamiento forzado en la región.

“La violencia perpetrada por razones criminales y no ideológicas es una de las causas principales del desplazamiento”, anota el Internal Displacement Monitoring Centre, que registró 5,6 millones de latinoamericanos viviendo en situación de desplazamiento en 2011, principalmente en Colombia, México, Guatemala, y Perú.

El crimen organizado desplaza para sacar del medio a personas o grupos que representan un obstáculo a sus fines delictivos; desplaza para ocupar territorios claves para el tráfico de drogas, personas, armas u otra mercancía. Desplaza al tratar de reclutar nuevos miembros y desplaza para mostrar su poder.

Y como el crimen organizado en América Latina no sabe de fronteras, el cubrimiento periodístico tampoco se debe restringir por límites fronterizos. Para investigar la forma en que las organizaciones criminales afectan a los derechos fundamentales, una alianza de medios digitales de la región – bajo la coordinación de InSight Crime y con el apoyo de la organización Internews – exploró la nueva cara del desplazamiento en América Latina.

En Colombia, donde unas cuatro millones de personas se han desplazado en los últimos 25 años por actores en el conflicto armado que vive ese país, VerdadAbierta.com exploró las nuevas modalidades del desplazamiento en el departamento fronterizo de Norte de Santander en donde todos los días campesinos engrosan las filas de los despojados escapando las amenazas,

extorsiones de grupos narco-paramilitares y guerrillas, y los combates entre esos grupos insurgentes y la fuerza pública.

En El Salvador, El Faro investigó el desplazamiento silencioso y casi invisible de pobladores de barrios en donde reinan las pandillas que amenazan con reclutar a los jóvenes, generan un ambiente generalizado de violencia, y describe la forma en que las casas abandonadas por los que huyeron rinden testimonio sobre las vidas de sus antiguos ocupantes.

Y mientras que el IDMC habla del desplazamiento de Guatemala como resultado de la guerra civil de ese país que terminó en 1996, Plaza Pública descubrió que en el departamento del Petén – el más grande del país -- la violencia de organizaciones criminales como Los Zetas está causando el desplazamiento de residentes, mientras que empresas de palma africana se están apoderando de vastos territorios para sus plantaciones a través de la intimidación de los campesinos.

Y en México, en donde la violencia de los carteles de la droga y sus ejércitos privados se vuelve cada día más cruento, un número de personas estimado en 160,000 se ha visto forzado a abandonar sus hogares. “Este desplazamiento apenas se ha documentado, pero la poca información disponible sugiere que un gran número de personas en las áreas más afectadas por la violencia asociada con los carteles de la droga han ido abandonado sus hogares a un ritmo constante, buscando seguridad en otro lugar”, según en IDMC. Como descubre Animal Político, los gobiernos locales y nacional tratan de minimizar el problema de desplazamientos masivos del Triángulo Dorado provocados por una lucha por el control del territorio entre organizaciones criminales.

En gran parte de la región la respuesta de las autoridades es similar: no reconocer el fenómeno de la nueva cara del desplazamiento a causa del crimen organizado o no registrar su magnitud. Y mientras tanto, la gente huye.

Desplazar para no ser desplazado

Por Oswaldo J. Hernández



El departamento de Petén, en Guatemala, es un vasto territorio en el que podrían caber las extensiones de Belice y El Salvador juntos, y que a pesar de ello, son pocos los que pueden cohabitar dentro de él. “Te quitas o te quito” parece el lema que en este lugar profesan narcotraficantes de carteles familiares tradicionales, empresarios

del monocultivo de palma africana, finqueros-vaqueros, Zetas, arrendadores de propiedades, petroleros y pueblos mayas q’echies, donde las propiedades de Petén suelen tener muertos sobre su superficie.

Días antes del 10 de mayo de 2011, cuando el pueblo de Sayaxché se preparaba para celebrar el día de la madre, un convoy de cuatro camionetas con vidrios polarizados levantó polvo y recorrió a toda marcha las orillas del caudaloso río La Pasión que corta en sur y norte la segunda carretera más importante del departamento de Petén.

Las camionetas enfilaron hasta detenerse frente al pequeño ferry municipal que separa a Sayaxché en dos caminos, uno a cada lado del río: uno en el norte, lleno de soledad y fincas sin energía eléctrica a lo largo de 20 kilómetros, y el otro, en el sur, con la bulla de cantinas en la ribera arenosa y la actividad cotidiana del casco urbano de este caluroso municipio que colinda con México y que a la vez es una de las entradas a la selva guatemalteca.

En esa encrucijada, a plena luz del día, hombres armados y mal encarados se apearon de los vehículos, caminaron en dirección del ferry, hicieron amenazas, tomaron como suya la pequeña embarcación y a sus empleados, encaramaron el convoy de cuatro camionetas y atravesaron el río mediante intimidaciones y el uso de la fuerza.

Al cabo de varios minutos bajaron del ferry y desaparecieron en el otro lado de la carretera. Se dirigieron hacia el norte y avanzaron presurosos, levantando polvo, desbocados.

—Desaparecieron y muchos en el pueblo suspiramos con alivio— dice Abner Palencia, un lancharero que vive de transportar lo que sea, de ida y vuelta, unas cien veces diarias en el río La Pasión en este corte de carretera.

Nadie en Sayaxché volvería a tener indicios del paradero de aquellos pistoleros sino hasta seis días después de la celebración del día de la madre. Una corazonada, un sentimiento que todavía deja inquietos a varios en el pueblo:

—Seguramente fueron ellos. Nosotros los vimos pasar unos días antes. No sabíamos que harían esa barbaridad— dice Palencia y arquea las cejas, dibuja con sus dedos una cruz en su pecho y abre bien los ojos mientras besa su mano derecha. Su sospecha consiste en que quizás esa macabra caravana que llegó al ferry aquella mañana fue la encargada de asesinar (y decapitar) a 27 campesinos en una finca al norte de Petén, en el municipio de La Libertad, el 16 de mayo de 2011. Esa noticia fue titular de varios medios internacionales. Fue, como lo dijo el ex Ministro de Gobernación (Seguridad), Carlos Menocal, un hecho atribuido a los Zetas, el brazo armado formado por ex militares mexicanos y guatemaltecos que desde el 2006 empezó a operar desligado del Cartel del Golfo mexicano, luego de que en 2003, el líder de este grupo, Osiel Cardenas, fuera capturado y extraditado más tarde a Estados Unidos.

—Los Zetas— dice Palencia —pasaron y pasan por este lugar. No hay de otra, no hay otro paso en realidad.

Un paso, un territorio, que no únicamente es exclusivo para narcotraficantes. No. Hay más actores en este escenario. Interactúan. Calculan sus movimientos. Suelen estar pendientes los unos de los otros aunque intentan, en la medida de lo posible, no tocarse. Y si se rozan, el saldo, como en la masacre de los 27 campesinos, suele afectar el equilibrio y la configuración de todo este vasto territorio. Es algo que está (y ha venido) pasando.

Hay narcotraficantes violentos, como Los Zetas, que han sido los últimos en llegar. Pero aquí, los primeros dueños de este territorio, finqueros y ganaderos, llegaron hace más de 50 años; indígenas q'eqch'ies y petroleros, hace más de 25; y narcotraficantes tradicionales y empresarios de palma africana, que aparecieron (como parte de los propietarios) hace poco más de una década. Hay —ha habido— reacomodos, pugnas, roles asumidos y disputas de poder en espacios donde las rivalidades de estos grupos suelen tener todavía pendientes, deudas por saldar y discusiones por el control de sus espacios. Por todos estos grupos, Petén es —ha sido— un campo de batalla donde los muertos quedan sobre la tierra, sobre la superficie de las propiedades.

1. Todo el mundo desplaza a todo el mundo

Estás en medio del río, en el ferry. Todo se mueve y todo cruje. A los costados observas las dos carreteras que cortan a Sayaxché por la mitad. Piensas en todo lo que te han dicho que se ha podido transportar a lo largo de un siglo por aquí, desde alimentos, ganado, cultivos, hasta petróleo, madera, piezas arqueológicas y contrabando. Te han contado que en las últimas décadas se han visto camionetas polarizadas de modelos recientes, y en años más cercanos a la fecha en que atraviesas el río, han primado los camiones cargados con aceite y frutos de palma africana, el nuevo monocultivo de toda la zona. También te han dicho que has llegado tarde para ser testigo de varios puntos importantes en la historia agraria de Petén (y de Guatemala) en relación a la distribución de la tierra, y te han advertido que debes intuir que ante tus ojos hay un nuevo momento de inflexión. A tu alrededor todo se está reconfigurando. Hay movimiento. Todo el mundo está desplazando a todo el mundo.

Hay narcotraficantes desplazados por narcotraficantes más asesinos que los anteriores. Hay empresas aceiteras que han crecido tanto que donde antes había comunidades hoy se ven planicies de palma africana que a la luz del atardecer parecen extensos y tranquilos océanos de color verde. Hay compradores de tierra que como si de un juego de estrategia se tratara van por la conquista de territorios y concentran enormes propiedades para luego arrendar los terrenos al monocultivo. Hay finqueros-vaqueros, que en vez de ganado están pensando en podar, cortar, vender todas las vacas y cambiar de profesión para hacerse empresarios de la palma. Y hay, también, los que tienen menos oportunidades: los campesinos, mayas q'eqch'ies en su mayoría, que a cada tiempo que pasa se van quedando sin poder decir que algo de acá —en este departamento más grande que Taiwán, Israel, Bélgica, El Salvador o Belice— es completamente suyo.

Por paradójico que te resulte, a lo largo y vasto de los 35.834 kilómetros cuadrados de Petén —un tercio de Guatemala—, pocos son los que están teniendo cabida en la repartición de todo este departamento. Te han dicho, existen evidencias, has logrado recopilar entrevistas, de que hay una disputa abierta, poco ética, a veces intimidatoria, por el control de cada centímetro cuadrado —ya sea económico, de cultivo, o como ruta de trasiego— en este territorio. Piensas en ello, absorto en el caudal del río La Pasión y caes en la cuenta de que estás exactamente en el centro de todos esos ajustes. El ferry cruje, avanza torpe y parsimonioso, pesado; sobre las aguas apenas se percibe algo de movimiento.

2. El lugar en movimiento: un contexto

La muerte de 27 campesinos en el municipio de La Libertad fue uno de los últimos acontecimientos violentos como indicio de los cambios que existen en este panorama. Un último movimiento de piezas en el tablero de Petén. Una sacudida.

Antes de esa masacre de mayo de 2011, Los Zetas ya habían dejado sentir su presencia, su fuerza, la irracionalidad de sus ataques. Sacudieron indirectamente a Petén el mismo día en que se presentaron. El día en que, de modo público, con balas y granadas y explosiones y asesinatos, aparecieron en Guatemala.

La carta de introducción fue dirigida específicamente a los carteles tradicionales-familiares de Guatemala, y fue firmada con plomo, muerte, fuego y gasolina. Coincidió con el día en que fraguaron una venganza en contra de uno de los grupos de crimen organizado locales que, según un reporte de InsightCrime, había dado un tumbé (robo) al aliado de Los Zetas en Guatemala: Walther Overdick, un antiguo cardamomero y amigo de los militares durante la guerra interna (1960-1996). Los Zetas buscaban, entonces, al líder del grupo de los Leones, a Juan José (Juancho) León. Lo encontraron el 25 de marzo de 2008, en un balneario de Zacapa, al suroriente de Petén, y acorralado, no lo dejaron vivo.

“Ese día iniciaron los reacomodos (de narcotráfico) en Petén. Una primera sacudida. El grupo de Los Leones había empezado a posicionarse en ese departamento, tenían propiedades, fincas de ganado, disputaban esa plaza, y empezaban —mediante robos de droga— a hacerse fuertes de manera incómoda para las otras familias (Lorenzana y Mendoza) dueñas de la zona”, dice un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE). “Por eso la venganza fue consentida por otros grupos”.

Si bien Petén no fue el primer lugar de ataque de Los Zetas en Guatemala, sí lo fue colateralmente. Pero cuando lo fue directamente, el avance de este grupo armado se topó con una situación favorable. Una coyuntura para aprovechar y ejercer su poder. Encontraron, primero, el precio a las cabezas de los capos locales más importantes impuesto por las órdenes de captura de EE.UU, y también, con un Ministerio Público (MP) que por primera vez tenía planificado perseguir capos en Guatemala. Se toparon, además, con un reajuste agrario de Petén hacia el monocultivo. La expansión insondable y agresiva de la palma africana que ha ido acaparando territorios y desplazando cultivos tradicionales (maíz, frijol) a lo largo de todo el sur de Petén. Incluso, como menciona el ex alcalde de Sayaxché, Luis Alberto Navarrijo, “el cultivo de palma ha ido cooptando y cambiando las economías locales, a las comunidades, pero también ha transformado los negocios ‘legales’ de ‘dinero negro’ de los grupos de crimen organizado tradicional que operan en estas zonas”. Petén, dice el ex alcalde, es un territorio que se está moviendo.

Al ser los últimos en llegar, después de la palma africana, también Los Zetas han contribuido con su granito de arena para que otras cosas se hayan empezado reconfigurar. Por ejemplo, a que mandos medios en los bandos rivales se vieran obligados a ascender. Los Zetas los ubicaron como nuevos objetivos, como una estrategia de control territorial para la zona. Eso pasó con el grupo de los Leones. Muerto el jefe, acribillado y achicharrado un convoy de Juancho León en Zacapa, se asomaron —en territorios como Petén— los siguientes en la cadena de mando jerárquico de este grupo. Nombres como Giovani España o Santos Manuel Aguirre o Haroldo León empezaron a ser mencionados. También empezaron a ser asesinados.

En tanto ese reacomodo sucedía, otras cosas en relación al modo en que el crimen organizado tradicional ha ido adquiriendo propiedades en Petén, usando dinámicas de bienes raíces heredadas de décadas anteriores, desplazando comunidades y haciéndose de territorio para establecer rutas propias en el departamento, poco a poco, han ido quedando al descubierto.

Hoy, 2012, cuando los Zetas tienen problemas internos en su estructura y presentan indicios de una ruptura que alcanza al sureste del México, incluyendo a Quintana Roo y particularmente la Riviera Maya, donde las últimas detenciones de sicarios y miembros del grupo son parte del conflicto entre Heriberto Lazcano Lazcano (El Lazca) y Miguel Ángel Treviño, conocido como el Z-40, “sus tropas dentro de Guatemala se están replegando, esperando un mejor momento para poder regresar”, vaticina el ex agente de la SIE al evaluar lo que sucede en la actualidad. “Hace dos años, en cambio, este comando armado arribó a un territorio de Guatemala donde las piezas campesinos, —palma africana, familias tradicionales de narcotraficantes— estaban (y continúan) en movimiento. Encontraron ese lugar y formaron parte de nuevas modificaciones”, señala. “Un lugar donde prevalece el más fuerte”.

3. La comunidad que ya no existe

Conduces por un camino de terracería. Hace unos 20 minutos, sobre la carretera de asfalto, decidiste virar hacia la izquierda. En algún sitio, entre los municipios de Dolores y Poptún, has decidido cruzar en dirección de Melchor de Mencos, el municipio más nororiental de Petén que colinda con Belice. Esta vez estás lejos de Sayaxché, al otro extremo de este departamento que en las escuelas de todo el país se enorgullecen de enseñar, aunque no sea cierto, que tiene cierto parecido con las Amazonas, y allí avanzas siguiendo el rastro de una comunidad que ha desaparecido hace 10 años a causa de unos narcotraficantes. Hace calor y no sabes si encontrarás algo, algún vestigio que pertenezca a esa comunidad de nombre El Arroyón, o a alguien que perteneció a ese lugar que fue expropiado por parte del

grupo de los Leones ya después de tantos años. Un ex alcalde de Dolores, Cristóbal Calderón, te ha dicho que en ese lugar hubo muertos. “Los muertos que no se entierran y que quedan sobre la tierra”, repites la frase, en este instante en que la única compañía que sientes en la solitaria carretera por la que vas es la densidad del aire caliente que entra por las ventanas. Ves algunas casas monumentales, cercadas, construidas en la cima de algún pequeño cerro, pero que a primera vista el diagnóstico es que han sido abandonadas, y alrededor, ves sólo fincas y más fincas, una luego de la otra. Es un camino que además es una ruta hacia Belice. Una ruta que además fue usada por el grupo de los Leones. Hay polvo. Planicies, haciendas con ganado, y otras sin ganado y con el pasto muy crecido.

Piensas que para entender el campo de batalla de los desplazamientos de este departamento hay que ubicar un pasado. Antecedentes. Indicios de cómo se ha comprado y vendido la tierra en el Petén. Comunidades que ya no existen. Los desplazamientos, la extensa compra y arrendamientos de propiedades por parte de la palma africana, los q'eqch'ies que venden cientos de parcelas y el territorio que ha sido marcado por el crimen organizado. Todo eso que ha venido sucediendo.

Cuando has avanzado 15 kilómetros de terracería, te das cuenta que has llegado a una pequeña encrucijada donde hay un insignificante retén militar. Soldados adolescentes, delgados, con bigotes incipientes te dejan pasar sin cuestionamientos. No pasan dos kilómetros para que, de repente, adquieras plena consciencia de dónde estás y el por qué te interesa precisamente esa comunidad desaparecida: “Aaah, a esa gente la mataron. Se mataron entre ellos. Ahora ya no hay nadie allí. La entrada a El Arroyón está allí nomás, cerquita, cruce a la derecha y allí está la finca”, te lo dice un anciano, sonriente, sin dientes, con esa edición del Nuevo Testamento que dan en algunos hoteles de Guatemala entre sus manos; te los has topado en medio de la terracería, justo cuando atravesabas una comunidad con el nombre de El Calabazal (“211 habitantes”, dice un cartel). Antes de despedirse el anciano te ha deseado un buen viaje.

El Arroyón era una comunidad de 28 parcelarios. El ex alcalde Calderón te ha contado que cada uno de los comunitarios tenía una caballería para cultivar o mantener ganado. Había familias y había cultivos. Había además una pequeña escuela, un salón comunal, un río que crecía en invierno y que nacía en el norte de Belice. Que desde la comunidad podías llegar a Belice, y que podías comerciar, traer cosas desde allá y llevar otras cosas desde acá. El Arroyón, te ha recalado el ex alcalde, era una comunidad. “Una comunidad”. Una igual a las que están dejando de existir en Sayaxché a causa del monocultivo de la palma africana, pues el cultivo es de los más escasos de mano de obra. Las dinámicas de compra y venta, de intimidación, aun si los grandes capos del crimen organizado no son hoy los

responsables, parecen tener una misma tendencia en todo el departamento y una misma manera de operar.

Algo como lo siguiente:

Hace 10 años, algunos comunitarios de la periferia de El Arroyón empezaron a vender sus parcelas. A ciencia cierta, en aquel momento, dice Calderón, aquellos comunitarios no sabían quién podría ser el interesado en aquellas tierras tan lejos de lo urbano. Compraba a buen precio, sin embargo. “Eran muchos dólares que encandilaban, y poco a poco, el comprador se apropió de todo el sector periférico de la comunidad. Fue cercando, fue presionando, fue creando una espiral con sus nuevos terrenos hasta que solo quedó el centro de El Arroyón, con unas 10 casas, como única evidencia de una comunidad”, te dice el exalcalde. Sin salida, los últimos habitantes de El Arroyón se vieron obligados a vender, y cuando vendieron, el precio que les ofrecieron fue barato.

Giovani España, el comprador del grupo de los Leones, convirtió a la comunidad en una enorme finca de 28 caballerías. Cuando lo hizo, todavía no era conocido por (supuesto) narcotraficante, tampoco que él era uno de los segundos mandos en la jerarquía del grupo de los Leones. Nadie imaginaria, en aquel entonces, que ascendería luego del asesinato de Juancho León a causa de los Zetas y que tomaría las riendas del negocio en el nororiente de Guatemala, esa región que hace de frontera y enlace entre Honduras, México y Belice.

Hasta hace 3 años, te dicen, el nombre de Giovani España era impronunciable por esta área. Antes, había que callar, cerrar los ojos y bajarle volumen a los oídos. Luego de su asesinato, el 26 de junio de 2008, su nombre es algo que adorna las pláticas de sobremesa en estas regiones. Un mito, una leyenda rural, algo de qué hablar cuando te aburres y hay que matar el tiempo de alguna forma. Es lo que hay, acá, cuando no existe una industria musical que produzca narcocorridos.

Te preguntas, miras al fotoperiodista que te acompaña, y lo interrogas sobre si de verdad piensa que encontrarán los vestigios de aquella comunidad perdida hace 10 años para hacer analogías sobre el modo en que hoy se compran las propiedades al otro extremo de Petén, en Sayaxché, alrededor de la palma africana, es lo que cuestionas justo en el momento en que en la carretera empiezan a aparecer algunos ranchos abandonados. ¿El Arroyón? Continuar o no continuar, es lo que quieres preguntar al fotógrafo que te acompaña, pero ir a echar un vistazo a lo que queda de aquella comunidad en este páramo en medio de la nada sigue siendo un motor mucho más potente, un impulso más grande, una curiosidad gigante, y lo que no haces es dejar de avanzar.

No has recorrido si quiera dos kilómetros en el interior de la carretera que pasa por la finca del “finado” (fallecido) Giovanni España cuando hallas, por fin, una casa, la única, humilde, pequeña: es del caporal. Esperas a que alguien salga a recibirte o a intimidarte. Pero ninguna de las dos cosas sucede. A lo lejos, una mujer lee un libro tan gordo y ancho que parece una biblia. Ella lee sentada frente a la fachada de la casa. Es cuando caminas los 50 metros que separan el camino de terracería de la humilde vivienda. Saludas y no pasa nada. En cada paso te recriminas el por qué diablos has llegado hasta acá. En cada paso te imaginas en la mira de un francotirador, o algo parecido.

La mujer, es extraño, murmulla. Parece estar hablando consigo misma o leyendo en voz alta pues en tu campo de visión no aparece nadie cerca de ella.

Si te ubicas, sabes que el camino desde donde has aparecido es uno por el que muy pocas personas pasan diariamente, sabes, desde luego, que no todos los días alguien busca una comunidad que ya no existe. Y con eso en mente, ensayas un “hola” en tu cabeza y esperas cualquier cosa.

—¿El Arroyón? Éste es el Arroyón. El otro Arroyón ya no existe— dice la mujer sin quitar la vista de lo que en efecto era una biblia.

—¿Queda alguien del antiguo Arroyón? Busco a alguien del antiguo Arroyón para saber cómo era. ¿Cómo desapareció?— pregunto.

—La verdad no sabría decirle. Nosotros venimos hace pocos años. No sabría decirle.

—¿Cuántos años hace que vinieron?

—Uff, apenas como tres.

—¿Vienen de alguna parte de Petén?

—No. Venimos de Izabal (al sur, cerca del Caribe y Honduras), de por allá abajo venimos.

—¿Y el caporal es su esposo?

—Sí. Pero no está.

Un ojo se asoma por una rendija entre las tablas de la casa justo en ese momento. El ojo te mira, lo miras. El ojo sabe que lo has visto. Se mueve. Luego hay un ruido, un tropiezo, cosas cayendo; el sonido viene desde adentro de la choza.

Ernesto, camisa desabotonada, sudoroso, barba sin rasurar desde hace varios días, es el caporal. Agitado, sorprendido, respira pesadamente e intenta mantenerse en calma; él ha salido a saludar. Le explicas, le indicas lo que buscas en este lugar, lo que estás tratando de entender, mencionas los desplazamientos, el proceso de extinción de comunidades ahogadas por el mar de la palma africana en el sur de Sayaxché. A Ernesto, el caporal, le haces las mismas preguntas que a su esposa, María, y obtienes las mismas respuestas que ella mencionó. Le preguntas —te

atreves— si sabe algo de las muertes adentro de esta finca en donde estamos, si aquel suceso tiene relación con la comunidad que ya no existe, pero guarda silencio.

Luego te dice (baja la voz, habla sin descomponerse):

—No sé si sabe, pero acá era la finca del finado don Giovanni España. La viuda ya vendió, pero el nuevo dueño nos siguió dando trabajo. De lo demás no sabría decirle.

4. Petén no es una selva

Los guatemaltecos están convencidos de que Petén es una selva espesa, insondable, llena de monos aulladores, jaguares, ríos y ruinas ancestrales. Es como lo enseñan en la escuela: la segunda Amazonia del continente. Toda una postal para el turismo.

Lo cierto es que desde hace 50 años una buena parte de su territorio, casi tres cuartos del departamento, han dejado de ser eso. Y Petén, si habría que describirlo en una palabra, esta sería “finca”.

De vuelta en Sayaxché en la frontera occidental con México, don Rosendo Girón, un hombre de pelo cano y lentes de profesor de matemática, llegó a Petén hace cuatro décadas. Tenía 23, recién graduado de abogado, cuando lo hizo. Hoy tiene 63 y recuerda que lo que encontró —él sí—, fue una selva exuberante, imposible, calurosa. “El Estado de los años sesenta estaba regalando la tierra a quien estuviera dispuesto a trabajarla”, explica. Él había obtenido 13 caballerías mediante la Empresa de Fomento y Desarrollo para el Petén (FYDEP / 1959-1989), y empezó a talar, como todos los demás, a descombrar y quitar árboles hasta dejar constancia de que aquel lugar (su finca en Sayaxché) no era una selva sino en realidad una finca enorme, plana, ideal para poner pasto y tener ganado.

La tierra se repartió por parte de los regímenes militares y el FYDEP exclusivamente entre mestizos y blancos. Los finqueros fueron así los primeros en llegar al Petén. Botaron los árboles y este departamento fue conocido como uno de los mayores productores de madera en Latinoamérica durante la década de los setenta. Don Rosendo ha sido testigo de varias dinámicas agrarias en la región a lo largo de toda su vida, y en Sayaxché lo ubican como el cronista de Petén. Pero se molesta si uno lo condena de esa manera. Comenta, no obstante, cuando se lo preguntan, cómo se han dado los distintos desplazamientos de esta zona, desde migraciones hasta petróleo, narcotráfico, palma africana y Zetas.

—La primera migración de campesinos q'eqch'ies —dice el cronista—, se dio una vez que se trabajó la carretera que sube desde Cobán, en Alta Verapaz, hacia Flores, en Petén. La medida fue una cuestión de contrainsurgencia, y fue orquestada por el cuerpo de ingenieros del ejército para neutralizar a la guerrilla en esta zona. Eso fue en 1982. Adjunta a la carretera, también llegaron las primeras transnacionales del petróleo, y el oleoducto, de cientos y cientos de metros de largo, que se ubicó al borde de todo el camino, buscando llegar al Atlántico.

—¿Pero luego los indígenas de la zona tuvieron acceso a la tierra?, ¿ejidos municipales?

—Bueno, fue un proceso largo. Luego del FYDEP llegó el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y luego, tras la firma de la paz de 1996, llegó Fontierras (Fondo de Tierras). Todo era con la intención de regular las titulaciones de propiedad. Que hubiera solvencia jurídica sobre la tierra y que nadie se atreviera a sacar a alguien de sus propiedades. Se repartió mucha tierra ociosa del Estado a los indígenas que no tenían. Y también hubo corrupción.

Y entonces Petén dejó de ser una selva, y sólo fue una enorme fauna. Una fauna llena de actores que se disputan la tierra. Unos que buscan rutas para el narcotráfico, otros, territorio para sembrar, y los más pocos para ver si los dejan vivir de lo que cosechan de la tierra y en paz de una vez por todas.

Así, con la tierra libre de árboles, el orden cronológico en la configuración agraria de Petén, empieza con los finqueros-ganaderos a finales de los cincuenta, los q'eqch'í's a principios de los ochenta, el petróleo al final de aquella década, el narcotráfico tradicional y familiar a principios de la década del noventa, el monocultivo de la palma africana en el 2000, y los Zetas que aparecieron a mediados de 2008. La selva que no es una selva tiene una fauna peligrosa.

5. Una planta en todas partes

Nunca en tu vida has visto una palma africana. Por eso mismo estás ansioso de que aparezca al menos una en la carretera. Estás atento mientras conduces. Ves corozos y palmeras de cocos y te preguntas diligente e ingenuo si aquello no es una palma africana. Luego estarás cansado, hastiado, aburrido de las palmas africanas. Hay de varios tamaños y de distintos tonos color verde. Están en valles, rodeadas por cerros empedrados. O están en terrenos tan planos y extensos que parecen una sabana. Las hay grandes y pequeñas, unas con más años que otras. Estarás harto de ellas y sus hileras ordenadas, perfectamente organizadas en líneas rectas y transversales, en los bordes de las carreteras. Y entonces tendrás licencia suficiente para denunciar que es una palmera enana y una planta fea. Que su fruto parece una piña colorada y fea. Y que de su fruto se desprenden unas semillas como jocotes también feos. Y que de estas semillas feas sale, cuando las presionas, un líquido

espeso, amarillo, todavía más feo. La palma africana, podrás decir, está en todas partes y es una planta horrible.

6. Claustrofobia entre la palma

Las comunidades Nueva Esperanza y La Torre se ubican en medio de la nada. Si a la nada, en Sayaxché, se le puede llamar así cuando lo que hay alrededor de La Torre y Nueva Esperanza, es en realidad un inmenso mar de palma africana. Y si la nada, también, son aquellas parcelas que los comunitarios vendieron hace menos de cinco años. O bien, en palabras del líder comunitario, Juan Yaxal, “la palma hizo que las comunidades se hicieran una nada, se redujeran hasta su más mínima expresión y que una gran mayoría de la gente se quedara sin parcelas”. Muchos comunitarios, en efecto, no tienen nada.

Un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), dice que la cosecha y la superficie captada por la palma tuvo un crecimiento de 590 por ciento de hectáreas entre el año 2000 y 2010 en Guatemala. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) contabilizó 58.800 hectáreas totales en el territorio guatemalteco para esa fecha. Y sólo para Sayaxché, se pasó de tener 465 hectáreas sembradas de palma en el año 2000, a 14.986 en 2006, y a 28.554 en el año de 2010. Y así exponencialmente.

“Todas las áreas aptas para la caña y la palma, lo son también para el cultivo del maíz”, concluye el informe.

Marcelino Chuc es el vicealcalde de la comunidad de La Torre. A él, los datos y los números y las estadísticas le parecen un misterio y no le importan demasiado. Le preocupa, dice, cosas más importantes, cosas que no se ven en los textos académicos pero que tampoco son intangibles.

—¿Sabés a quiénes se les dice coyotes?— pregunta Marcelino. —En el sur de Petén el coyote no es aquel que se lleva gente (migrantes) para otros lados. Sino que es el que anda moviendo propiedades. Son traicioneros. Acá en La Torre casi desaparecimos gracias a ellos.

Marcelino cuenta la historia de un señor de apellido Caal para que se entienda mejor de lo que habla. Tiene gracia a la hora de narrar. Mueve los brazos, hace gestos, dibuja con palabras un paisaje, un contexto, una historia. Si no hubiera llegado hasta tercero primaria —el máximo grado académico al que se puede aspirar en las escuelas de estas comunidades del sur de Sayaxché—, dice que le hubiera gustado ser maestro o quizás un escritor. “A Salvador Caal lo olfatearon muy temprano”, empieza a narrar Marcelino, “no es que no se bañara mucho que digamos o quién sabe (sonríe), pero los coyotes lo olfatearon. Salvador tenía un

terrenito que era un terrenote. Aquí cerquita. Entonces lo quisieron cazar. Como era astuto el condenado no se dejaba manipular. Ni dinero ni nada quería. Él era feliz, decía. Pero los coyotes lo cercaron. Un día se enteraron que su terreno se podía encerrar haciendo mañas. Entonces compraron las manzanas de los alrededores, unos pedacitos de tierra insignificantes, apenas ni parcela eran. Pero cabía al menos una pared, mal hecha, pero una pared al fin de cuentas. Todo era legal. Salvador ya no pudo salir de su terrenito ni por delante ni por atrás, ni por la izquierda ni por la derecha. Y cómo no sabía nada de abogados, tampoco, como nosotros, que ahora podemos quejarnos con los diputados, o que nos organizamos, o le vamos a tocar la puerta a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), Salvador empezó a alegar como podía. Alegó con armas, alegó a puño limpio, pero Salvador ya tenía 89 años. Dicen que terminó vendiendo por 20.000 quetzales (US\$2.500) su terrenito de 1.000 hectáreas. Aquí cerquita. Allí donde hay palma. Don Salvador hoy ya murió. Era una buena persona”.

El encierro puede producir claustrofobias particulares. Entre los bosques de palmas africanas hay varios de estos trastornos desde perspectivas muy peculiares. En su mayoría son casos de ansiedad colectiva, con sentido comunitario. No es el miedo al espacio cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias negativas de no poder salir. Se produce cuando la palma africana no te deja salir.

Comunidades como Santa Isabel o El Pato, cerca de Alta Verapaz, otro departamento de Guatemala, al sur de Petén, han quedado perdidas como pequeñas islas en algún lugar del océano de palmas africanas. Antes, para los habitantes de estas comunidades les bastaba recorrer unos cuantos kilómetros de terracería para salir a la carretera con asfalto y llegar a la cabecera municipal de Sayaxché. Era un recorrido de media hora. Hoy, tardan casi 4 horas para hacer esa peregrinación. José Cabnal es el director de la escuela primaria de la comunidad Santa Isabel, y uno de los que se siente encerrado. Él explica que deben driblar las vastas extensiones de cultivo de las empresas de palma africana y los enormes portones con garitas y guardias de seguridad armados, cuando alguien de su comunidad se ve en la necesidad de hacer algún trámite legal o municipal, o ir al hospital, o salir a comerciar y vender alguno de sus productos.

El encierro les ha causado migración. A veces incertidumbre sobre cómo sobrevivir. Y otras veces pleito. Cabnal dice que lo que experimenta es un sentimiento al que él podría comparar a cuando sientes ansiedad de estar en un solo lugar y que no puedas moverte. “Cercados, encerrados, es como ahora vivimos”.

A veces la claustrofobia en estas carreteras de rectas interminables no hace distinciones entre la sensación de estar afuera o estar adentro. Es tan grande el territorio que si hay un muro en medio de esta nada, no sabes ubicar si has quedado adentro o fuera de la palma. Adentro o afuera de una empresa del aceite.

Juan Xol es un ejemplo de ello. Viste botas de hule, una gorra color naranja y va todo sucio de lodo. Varado en la carretera, intenta llegar a casa, lo cuenta mientras esperamos juntos un autobús sobre la carretera. Acaba de atravesar uno de los muros perimetrales de una de las empresas de monocultivo, Repsa S.A., del grupo HAME, en el kilómetro 355, frente a la comunidad de La Torre, e indica que no le pagaron lo que habían acordado. Por eso, en la carretera, ofrece su teléfono celular, “lo vendo para poder pagar mi pasaje; voy para Cobán (Alta Verapaz, a casi 100 kilómetros de Sayaxché)”, explica. Su encierro, su forma particular de claustrofobia, de sentirse encerrado, ha sido un poco distinto a cómo lo sienten los comunitarios de Nueva Esperanza o La Torre o Santa Isabel o El Pato, pero un encierro al final de cuentas, sólo que adentro de una empresa. Si le preguntas a Xol sobre cómo es allí adentro, en la empresa, es algo de lo que no quiere hablar: “Yo no regreso allí dentro”, especifica.

7. Las empresas de palma africana

Toda la gremial de agrocombustibles está presente en esta zona. Las empresas que intervienen en Petén, ciertamente llenan una lista muy corta. Olmeca y Reforestadora de Palmas (REPSA) del Grupo HAME, es unas de las que se expandieron hacia el municipio de Sayaxché, donde hoy cohabitan con otras del mismo cultivo: Tikindustrias S.A., por ejemplo, es una de ellas y es propiedad de la familia de azucareros Weissenberg y del Grupo Pantaleón, propiedad de la familia Herrera. Guatemala es el cuarto exportador mundial de azúcar, y tiene 13 ingenios. Nacional Agroindustrial (NAISA), de la familia de aceiteros Köng Hermanos, es otra ubicada en este lugar. Palmas del Ixcán, de las familia Arriola Fuxet es otra en expansión. Y más recientemente, en proceso de adquisición de tierras en el Petén, está Naturaceites S.A., en el municipio de San Luis, y es propiedad de la familia Váldez y Maegli. Algunas de las familias más poderosas de Guatemala.

8. La pugna está por iniciar entre todos los bandos

Una vez más te has desviado de la cómoda carretera con asfalto. Una vez más estás en un camino de terracería, otro pasaje solitario, lleno de charcos, hoyos y piedras. Te han dicho que la palma se está expandiendo hacia el municipio de San Luis, justo en el lado oriente de Sayaxché, y es lo que estás buscando: un momento previo a todo lo que has visto que le ha ocurrido a ciertas comunidades. Imaginas un instante antes de que se siembre la palma, de que lleguen las máquinas, los muros de monocultivo, el encierro, la claustrofobia a causa de la palma. Los coyotes de la tierra en infraganti, comprando propiedades, concentrando tierra, amenazando. Quizá, en esta nueva búsqueda, en San Luis, te topes con una gran

antesala que pueda explicar las consecuencias de lo que has visto: los reacomodamientos, desplazamientos y la desaparición de varias comunidades.

Aquí, en este nuevo terreno, amplio, una octava parte de Petén, todos los bandos están a punto de encontrarse. O desplazas o te pueden desplazar tiene un detalle coyuntural. El detalle de lo actual.

En San Luis, te comentan, ya se están preparando. Hay una región que intenta identificarse como Territorio Indígena Q'eqchí' y te quieren mostrar que se están organizando. Andrés Ixim, en la comunidad de Bolojshosh, es uno de los líderes que te hace un balance, un recuento de su planificación, y en confianza, te explica que una de las cosas que se ha empezado a hacer es demarcar cada una de sus fronteras. El espacio, te das cuenta, será grande, aunque difícil de conseguir. Implicará, definitivamente, el plano del uso político, lo legal y lo legislativo. Y será un área que tratará de incluir al menos 20 micro-regiones, cada una con 10 comunidades en su interior, desde Bolojshosh, cerca de la cabecera de San Luis, hasta la comunidad de El Naranjal, la última frontera de Petén con Alta Verapaz. “Los territorios indígenas son un derecho heredado por nuestros antepasados. Es crear una unidad, un sentido de comunidad importante, donde la gente, antes que nada, asuma un compromiso con los de su propia sangre”, Ixim resume así el inicio de su resistencia.

La resistencia que es en contra de la siembra de la palma.

Pero aquí, en el interior de este municipio, existen otros problemas. Incumbe al nuevo territorio indígena por su cercanía, pero incumbe a la siembra de la palma y a narcotraficantes.

Has llegado a esta zona justo en un momento de tensión. Aparentemente hay calma en El Naranjal, esa última frontera de Petén, pero la presencia militar y los patrullajes policiales —algo que no notaste ni en Flores, Poptún, Dolores, Sayaxché, La Libertad, Melchor de Mencos—, hacen activar una discreta alerta dentro de ti. Te enteras que hace apenas 2 meses el tableteo de las metralletas horadó y trastocó este lugar. Cuando la balacera amainó, el saldo silencioso fue la muerte de cuatro personas. El enfrentamiento, te dicen los vecinos, lo evalúan como algo que se dio entre supuestos miembros de bandas del crimen organizado. Es lo que todavía hoy se comenta en el pueblo. En El Naranjal dicen que la pugna se originó cuando uno de los dos grupos armados pretendía invadir una finca propiedad de otro grupo armado en esta localidad. Es esa misma finca, justo por donde ahora vas pasando, en el centro, donde los muertos quedaron sobre la superficie de la tierra, y sorpresa, en ella, señalizados, a cada lado de la carretera, hay 10 lotes de palma africana para cultivar.

Por supuesto, aunque no es prudente, quieres detenerte para hacer unas fotos. Consigues frutos de la palma, abandonados sobre la carretera, son frutos feos desde luego, son frutos que parecen poco cuidados. Tomas uno de los frutos, color corinto-sangre, cuando los balazos suenan imaginariamente adentro de tu cabeza.

—Esa finca es de Ottoniel Turcios Marroquín. Eso no es un secreto por acá—. El sargento, Felipe Villalobos, intenta explicarte en dónde exactamente te has bajado, lo imprudente e ingenuo que fuiste, lo peligroso que pudo haber sido todo. Él, el sargento, es el encargado del destacamento militar que fue instalado en El Naranjal apenas dos días después de aquella balacera. Está acá, junto con otros cinco militares, desde el pasado 2 de junio.

El sargento Villalobos te ubica —justo donde platicas con él y sus soldados— y te dice que este es territorio Zeta.

Entre 2006 y 2010, Otoniel “el Loco” Turcios, según información oficial, manejó una de las cuatro columnas de poder que los Zetas utilizaron para entrar en Guatemala, y su jefe absoluto, en aquel momento, el encargado de la toda la zona en Guatemala, era Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40. Turcios, dice Villalobos, siempre operó entre Alta Verapaz e Izabal al sur de Petén (tenía empresas de transporte y construcción, e incluso recibió contratos del gobierno), hasta que lo capturaron en Belice en octubre de 2010 y lo extraditaron a EE.UU. El sargento indica que Turcios dejó arrendada esa tierra en la que quedaron algunos muertos recientemente, la misma que tiene señalizados 10 lotes de palma africana.

“Turcios, al igual que muchos otros narcotraficantes de la zona, antes de ser capturados, ya eran todos unos pioneros de la siembra y el cultivo de la palma”, dice el analista político Miguel Castillo, analista y asesor para varias compañías de palma africana. Él te dice que sabe de casos donde las familias del narcotráfico tradicional han intentado vender palma a las compañías de la palma. Y también te comenta que “en nuestros análisis, como empresas de la palma, intentamos no estar cerca de estas personas, no vincularnos con narcotraficantes”.

Trabajar el monocultivo resulta una cuestión de riesgo. Un riesgo donde se pueden accionar las armas.

El sargento Villalobos te indica que la presencia del ejército en esta frontera entre Petén y Alta Verapaz fue algo necesario. Te ha dicho que de la balacera no se tiene información detallada todavía. “Lo que no sabemos es si se trató de una pugna entre mandos medios en la estructura de Turcios Marroquín, o si era una lucha por parte de campesinos en busca de terrenos que no tuvieran dueño”. Ambas cosas son posibles.

—¿Cree que los grupos familiares de narcotráfico tradicional están por completo debilitados en esta área?— la pregunta es dirigida al sargento Villalobos.

—Información de ese tipo no la manejamos. El ejército está en esta zona como medio disuasivo. Es cierto que estamos acá, en Petén, por cuestiones de narcotráfico. Pero también estamos para defender el Estado de Derecho. Invadir una finca, es violar ese derecho— comenta el sargento.

En estas regiones calurosas, un detalle que no deja de saltar a la vista, es que la gente, los soldados, los campesinos, los de a pie, ya ninguno tiene miedo a los narcos. Los nombres impronunciables de hace años simplemente son contexto, anécdota, historias para las tardes soleadas a la sombra de los árboles, han llegado al punto en que incluso pueden ser temas banales. Lugares comunes para la gente y los campesinos. Y como algunos nunca volverán por estar muertos o presos, León, Turcios, Lorenzana y otros, la gente usa sus historias para evitar el tedio de las horas, el ocio de las tardes.

Villalobos menciona todos los nombres de familias del narcotráfico cuando indica que una de sus órdenes (como ejército) es proteger las inversiones de desarrollo. Así el destacamento de El Naranjal, en San Luis, tiene la orden de proteger la inversión de la agroindustria. Y la orden presidencial, la más reciente, no ha sido otra cosa que la coordinación de la sexta y la primera brigada, Petén y Alta Verapaz, para que se combinen, para que ambas puedan incursionar en el territorio fronterizo de los dos departamentos. Justo entre la palma africana, el narcotráfico y los campesinos. En ese lugar de encuentro para todos.

9. Un área de inversión

Hablar de cualquier cosa con los empresarios en Guatemala que no sea para hacer publicidad de sus logros es toda una odisea. Tan solo consultar, pedir una cita, para que te cuenten su propia versión de las cosas, o cómo analizan conflictividades o riesgos, es una tarea imposible. Incluso si es algo importante que les afecta: los empresarios se vuelven crípticos. Se atrincheran. Hubo intentos, varios, largos, burocráticos e infructuosos de intentar hablar con Hugo Molina de Repsa S.A, Christian José Weisenberg de Tikiindustrias S.A., también con José María Kong de aceites Ideal y Naisa S.A., y con José Enrique Arriola Fuxet de Palmas del Ixcán. Nada.

Erasmus Sánchez, Gerente de Asuntos Corporativos de Naturaceites S.A., productores de Aceites Capullo, no obstante, sí estuvo anuente a hablar. Sobre todo cuando Naturaceites es una de las empresas que, luego de tener cultivos en San Marcos, Izabal y Alta Verapaz, recién llega a cultivar palma africana en Petén.

Sánchez, dice, está interesado en ayudar a entender lo que sucede en ese lugar. En el área de inversión.

Una pregunta obligada: —¿Naturaceites S.A. tiene consciencia de los grupos de poder que se disputan algunos territorios en Petén?

—Nos interesa, ciertamente, una expansión en el área de San Luis—responde Sánchez. —Nuestra empresa se especializa en la producción de aceites para consumo humano. Nosotros no producimos agrocombustibles. Tenemos consciencia de que los terrenos son aptos para el cultivo de la palma, para la inversión. Sin embargo, algo como una evaluación de la gente que habita en estos lugares, quiénes son y qué hacen, no tenemos. No tenemos, si se quiere plantear de alguna manera, algo parecido a un “departamento de inteligencia”.

—No obstante, están enterados del conflicto reciente en la aldea El Naranjal (4 personas muertas) en una finca con palma africana, precisamente en San Luis.

—Conocemos de lo sucedido. Pero corresponder o actuar al respecto no es uno de nuestros rubros. Eso es responsabilidad del Estado.

—¿La palma africana de la finca invadida producía para Naturaceites S.A.?

—La información que tenemos es que el cultivo de palma en esa finca no está siendo tratada. No sirve. Son palmas que se van a desperdiciar. Y desde luego, la respuesta es no. No llega al área de procesamiento de nuestra empresa.

—¿Cómo funciona el proceso de la siembra, es decir, la dinámica de las tierras y propiedades con las que trabajan y de dónde obtienen el fruto para producir aceite?

—Existen tres modalidades básicamente. Uno es establecer alianzas con proveedores externos, nos llevan su cosecha, compramos su cosecha, y producimos el aceite. El otro es por arrendamiento. Y luego la compra de propiedades. Si se nos pregunta sobre si evaluamos a quiénes nos traen su cosecha, pues no lo hacemos, el Estado sería el responsable de darnos ese tipo de advertencias en caso sepan que se pueden dar anomalías.

—¿Tienen opinión sobre la manera en que los campesinos han ido vendiendo sus tierras?

—Como te decía el Estado es el responsable de mediar si hay anomalías. La adquisición de tierras, en lo que respecta a nuestra empresa, siempre ha sido legal. Si todo es legal, no veo el problema, estamos en nuestro derecho. Cuando se compra sí debemos estar seguros de que el título de propiedad esté en orden.

—El narcotráfico en Guatemala, en los últimos años, ha tenido importantes capturas. ¿Ven positiva para la inversión las acciones del Estado en el hecho de establecer seguridad?

—Sin duda es un fomento a la inversión. Naturaceites intenta evitar a toda costa mezclarse con personas y negocios de dudosa procedencia. La presencia del Estado al menos nos da una garantía para el resguardo de lo que se invierte.

La palma, está decidido, no piensa retirarse o replegarse en su método de producción. El área de inversión es más importante todavía que los mismos conflictos. La noción de “desarrollo”, el “progreso”, incluso es más grande que todo el territorio de Petén, en Guatemala. “E incluso”, dice Castillo, el analista de la palma, “posiblemente más fuerte políticamente que los otros grupos que están en pugna en ese territorio”.

10. Apenas algo de turbulencia

Estás de regreso en el ferry, en medio del río La Pasión. Todo cruje y todo se tambalea. Petén se corta acá en dos partes, es un impasse, aunque en realidad los cortes de este departamento, piensas, son más profundos y son extensos, históricos, actuales y en definitiva hay disputas sobre cada uno de los territorios que se crean en su gigantesca superficie. Entre q'eqch'ies, entre finqueros-ganaderos, familias de narcotraficantes, empresarios de la palma, el oleoducto de petróleo, carteles recientes y violentos, ver los límites entre ellos es algo difícil de abarcar. A los costados observas las dos carreteras que cortan a Sayaxché por la mitad, hay una planicie, en el norte, y hay una pequeña y fea ciudad, en el sur, y piensas que en todo lo que hay detrás de ese paisaje únicamente hay una pieza que hace falta, una pieza importante, relevante, en todo ese rompecabezas que se reconfigura y se disputa a tu alrededor. Apenas te has topado con él y no ha sido relevante. El Estado. Y es cuando te dices que si no existe el Estado, otro, quizá con fuerza —balas, granadas y gasolina—, a lo mejor con intimidaciones —cercar, comprar, amenazar—, u organización comunitaria—territorialidad, tradición—, en definitiva, alguien más, terminará por asumir ese rol. Asumirá el control. Los demás deberán cumplir sus reglas. La duda que te queda sin resolver, desde luego, es lo que podría pasar más adelante. Narcotráfico, palma, campesinos organizados. Todos están allí, cerca, se rozan, respiran uno al lado del otro a la espera de tener que salir a reconocer sus territorios. En el río La Pasión, el ferry apenas deja una estela de turbulencia.

La legión de los desplazados

Por Daniel Valencia Caravantes



En los suburbios de El Salvador hay cientos de casas abandonadas, desmanteladas, en colonias manchadas por los grafitis de la Mara Salvatrucha o de la pandilla Barrio 18. Esas casas cuentan el drama de cientos de familias que hoy viven en silencio sus propias historias de violencia: las de los desplazados por las pandillas.

Hay casas que hablan. Gritan cosas, cuentan retazos de grandes historias. Esta, en la que recién entramos, es una de ellas. No es muy grande: cuatro cuartos, una pequeña terraza y un patio. Por los acabados que sobreviven (piso cerámico, ladrillo rojo adornando las paredes exteriores, portón de rejas metálicas) uno diría que la familia que vivió aquí le puso mucho cariño y empeño a esta casa. Por las advertencias pintadas en las paredes, uno también diría que la familia que vivió aquí sufrió el desplazamiento, la huída, el dejarlo todo.

Si la vida de Sabine Moreno pudiera explicarse con una línea de tiempo, una sucesión de eventos representados por coordenadas y picos unas veces altos, otras veces bajos, podríamos decir que la antigua vida de Sabine Moreno acabó cuando su familia recogió lo poco que podía y huyó de la comunidad sin rumbo fijo.

Pico alto en el diagrama: la familia huye sin rumbo fijo.

Ese fue un momento trágico. Quizá no tanto como el asesinato del abuelo (emboscada en el camino, no muy lejos de la comunidad, sí muy cerca de la estación de taxis; tres balas, ningún testigo, sangre saliendo de la boca) pero doloroso al fin de cuentas.

Pico alto en el diagrama: asesinato de su abuelo. Mauricio Moreno. Q.E.P.D. 06/10/1960 – 18/11/2010.

El asesinato de Mauricio activó por fin esos sensores nerviosos que desde el cerebro le ordenan a los pies correr. Los mismos sujetos que se presume lo mataron, en ese mismo año, ya habían acabado a otros seis miembros de la familia de Sabine, para entonces una colegiala de 16 años con muchos sueños. [El nombre de Sabine, como

el de otras personas mencionadas en esta historia ha sido cambiado por su seguridad.]

Uno podría preguntarse: ¿por qué esa familia no huyó cuándo cayó la primera de sus víctimas? ¿Quién aguanta tanta muerte antes de decidir largarse de su comunidad? Entre las mujeres que ahora lideran a la familia hay versiones encontradas. Blanca, la madre de Sabine, dice que al principio no creyeron que esas muertes tuvieran que ver directamente con ellos. Amelia, la abuela paterna de Sabine, dice que no se iban por culpa de su marido. La familia hacía todo lo que dispusiera Mauricio, y Mauricio se oponía a abandonar ese pedazo de tierra en medio de huertas y cafetales que tanto les había costado a todos.

Mauricio era un evangélico comprometido y confiaba en que Dios resolvería todos los problemas en los que se metieron solo por el hecho de vivir donde vivían. Decía que si Dios quería que dejaran este mundo, no había por qué oponérsele. Pero el abuelo también era un pecador. Lo dice Amelia, su viuda. Se refugiaba en la iglesia para huir del trago. En su batalla interna entre el bien y el mal, los asesinatos en contra de sus familiares poco a poco fueron inclinando la balanza hacia su principal flaqueza. En una de sus tantas borracheras perdió la compostura y desenmascaró sus rencores frente a unos ojos que se enfurecieron cuando lo escucharon proferir una amenaza. Una noche, a la orilla de un camino que atraviesa la comunidad, tambaleante y extasiado, Mauricio se olvidó de Dios y dijo que haría justicia con sus propias manos. A los días de esa borrachera y de esa amenaza lo emboscaron y lo acribillaron. Su familia encontró su cadáver ensangrentado, con tres balas en el pecho y una en el rostro. A esos que ofendió no les gusta que los amenacen.

Habrán sido, alguna vez, felices. Lo dice, en primer lugar, ese paisaje que sobresale detrás de una ventana sin vidrios y sin barrotes. En ese hueco está pintado el volcán de San Salvador. Es un cuadro hermoso: el río bajo la cumbre, la carretera, una huerta, y al fondo el volcán, imponente, sombreado por unas nubes.

Quienes vivieron aquí añejaron muchos recuerdos. Lo dicen los árboles de mango y mandarina que inundan con su aroma todo el patio. A juzgar por su tamaño, cinco metros la mandarina, 15 metros el mango, los árboles llevan varios años echando frutos.

Muerto el abuelo, ya no había poder que se opusiera al éxodo de la familia Moreno. Una mujer bajita y resuelta decidió por todos. Amelia, la abuela de Sabine, viuda de la noche a la mañana, se echó auestas el control de toda la familia, compuesta por 20 integrantes. La séptima muerte en la familia los hizo partir. El miedo por fin fue miedo, y ordenó a los pies de esas 20 almas correr en abierta y urgente estampida. Se lo dijeron a Blanca, la mamá de Sabine, el sábado 11 de diciembre de 2010. Sabine lo escuchó todo.

—Dijeron que nos íbamos a ir pero no dijeron cuándo. Para nosotros fue una gran sorpresa cuando al siguiente día nos avisaron que alistáramos las cosas— dice.

Huir, abandonarlo todo, sacudió las fibras más íntimas de Sabine. No es fácil abandonar el terruño, piensa ella. No es fácil que le roben el terruño a punta de pistolas y muertos. Lo comprendió cuando buscó sus cosas para meterlas en una maleta. Sintió un vacío en el pecho, pensó que es difícil dejar atrás toda una vida, sobre todo cuando ahí han crecido tres generaciones de una gran familia. Ella (16 años), su madre (35 años), su abuela materna (50), su abuela paterna (52), habían nacido ahí, en el cantón El Guaje, y a partir de aquella noche ya nunca más regresarían ahí, donde lo dejaron todo.

Al igual que ellos, otras 23 familias de esa comunidad huyeron en diferentes oleadas a lo largo del 2010.

Recuerdo de Sabine: empaca lo que puede en cuatro horas. Se siente triste, se pregunta: ¿se puede meter toda una vida en una maleta? La respuesta es obvia. Apenas y alcanza llevarse, además de la ropa, un televisor. Sabine cree que hacia dónde la llevaban podrá conectar el televisor. Un carro patrulla de la Policía Nacional Civil entra a la comunidad. Sigue a otro vehículo con placas particulares, prestado por un amigo. Es un camión. Es lo único que la autoridad puede hacer: entrar y salir, custodiar la partida. Todos se encaraman en la cama de los vehículos. Huyen. Se largan para nunca más volver.

Coordenada: Sabine Moreno y su familia huyen de la Mara Salvatrucha 13.

Pico alto: Sabine es desplazada del cantón El Guaje, Soyapango, El Salvador.

La casa abandonada habla más que esta vecina nerviosa, que vive en la casa de al lado, que revuelca las pocas palabras que salen de su boca y responde apresurada y nerviosa a las preguntas de Houston, el policía que nos acompaña. Esa vecina no recuerda el nombre de los inquilinos. “Se fueron hace mucho tiempo. No los trataba mucho”. La casa dice que la desmantelaron. No hay techos ni focos ni ventanas ni cableado eléctrico. Tampoco grifos en las pilas ni palanca para el retrete.

La casa también le pone nombre y apellido a “los muchachos” que ahuyentaron a los que aquí vivían. En una de las paredes, hay dos letras pintadas en negro. Una es M y la otra S. Son dos letras mayúsculas, muy grandes. Son las siglas de la Mara Salvatrucha 13, unas de las pandillas más peligrosas del mundo. En otra pared, esas letras están divididas por dos manos huesudas, con uñas largas. Las manos hacen señas. Una es una garra, la otra es una letra. Abajo hay tres letras más. Son las

iniciales que dan nombre a la clica que se tomó esa casa: Diabólicos Criminales Salvatrucha (DCS).

En el patio, debajo del árbol de mango hay frutos masticados, semillas chupadas, colillas de cigarros, una botella plástica que alguna vez almacenó guaro. En el retrete hay restos de heces. Ya están secos. Houston dice que aquí se reúnen los muchachos. Que la casa para ellos es estratégica, porque desde este punto de la colina, pueden observar cuando los policías entran o salen de esta colonia. Houston, sin dramatismos, dice que los muchachos se reúnen aquí para “planear sus fechorías”.

—Por eso expulsaron a los inquilinos— dice.

Nos alejamos del sector y después de cruzar dos redondeles y tres calles estamos en otra colonia. Houston nos muestra otros pasajes con casas abandonadas. Pero aquí los muchachos que ahuyentan a la gente tienen otra nomenclatura para autonombrarse. “Fuck the police”, escribió alguien en una pared. “18”, cierra esa frase. Aquí controla la pandilla Barrio 18, otra de las pandillas más peligrosas del mundo, y enemiga de la Mara Salvatrucha.

En un radio de unos dos kilómetros cuadrados, las pandillas con mayor fuerza, poder y presencia territorial de El Salvador mandan mensajes a través de los grafitis de las casas abandonadas.

Otra casa que habla. Y otra más: alguien arrancó los ladrillos de esta y ha sembrado una pequeña huerta en el patio y en el último cuarto. En otra, unos niños han entrado a jugar con pintura. Se mancharon las pequeñas manos y las estamparon sobre las paredes. En otra alguien le declaró su amor a alguien más. “Dagoberta y Seco. Amor por siempre y para siempre”, escribieron, junto a un corazón pintado con tiza en la pared, y un cartel de Minie y Mickey tomados de la mano.

En este pasaje de 70 casas hay 25 abandonadas. ¿Qué les pasó a esas familias? ¿Por qué huyeron? ¿De qué huyeron? ¿Quién compra o alquila una casa para luego dejarla abandonada? ¿Por qué nadie llega a vivir ahí? ¿Por qué ningún vecino explica adónde se fueron esos otros vecinos?

Nadie, en ese pasaje, se atreve a contestar esas preguntas. Menean la cabeza en señal negativa y entre el silencio y la mirada esquiva uno alcanza a percibir algo que se podría traducir en miedo. Miedo a decir algo que no deben decir. Miedo a ser vistos hablando con la policía. Pero Houston, 23 años como policía, es atrevido y desconfiado. Dice que la gente que se ha quedado no contesta porque son familiares de “los muchachos”. Uno no sabe si creerle a él o sospechar que esos que se han quedado simplemente tienen miedo. Quién sabe.

Houston pide que aceleremos el paso. Lo pide luego de que un par de niños se nos han atravesado, por tercera vez, montados en unas bicicletas. “Son orejas de la pandilla. Andan queriendo saber qué estamos haciendo”, dice Houston, de nuevo, sin dramatismos. Uno piensa que esos niños, a estas horas de la mañana, deberían estar en clase, pero tal vez reciben clases en la tarde. Quién sabe.

Los compañeros de Houston –otros siete policías- se repliegan y avanzan hasta el carro patrulla. Hace unos minutos, dos de ellos custodiaban con sus rifles la entrada del pasaje de las casas abandonadas. Otros dos estaban en el otro extremo del pasaje, y el resto había hecho un cerco alrededor nuestro. Nos daban las espaldas y miraban en todas direcciones, incluyendo a los techos de las casas de un solo piso. Todos vigilaban. Saben que este es territorio de la pandilla y de nadie más.

Salimos de Lourdes, Colón, La Libertad —uno de los municipios más violentos del país—, apenas con una idea de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en El Salvador. Las casas han contado algo pero no lo suficiente. Sus inquilinos han desaparecido y es casi una norma para los desplazados continuar así: olvidados por todos. Es preferible eso a meterse en problemas con aquellos que los expulsaron. Por eso para entender lo que esas casas no pueden terminar de contar habrá que rastrear a esos fantasmas desplazados, subir una cumbre ubicada en las afueras de la ciudad, luego bajar, acercarse a las orillas de un río y entrar en una casa con paredes de lámina y piso de tierra. Habrá que seguir hablando en el último refugio de Sabine Moreno.

Hace más de 30 años, El Salvador entró por una puerta angosta a uno de los capítulos más oscuros de su historia. En las montañas tronaban las balas, estallaban bombas, se asesinaban salvadoreños. En algunos puntos del país se cometieron barbaries contra hombres, mujeres y niños. Bombas, balas, sangre, muertos. Acusados de pertenecer a uno u otro bando (el ejército o la guerrilla) muchos campesinos decidieron dejar sus ranchos, bajar de las montañas y esconderse dónde fuera. Fueron desplazados. Se movieron a las ciudades, a la orilla de los ríos, o a pequeñas comunidades marginales que con el tiempo crecieron y se convirtieron en colonias. Muchos otros no solo fueron desplazados sino que se convirtieron en migrantes y lograron llegar hasta los Estados Unidos.

Pico alto para El Salvador: guerra civil, 1980-1992.

Finalizada la guerra, hace 20 años, a El Salvador regresó la paz. Pero sería difícil precisar cuánto tiempo duró esa paz, porque el país comenzó a experimentar otra guerra: la de las pandillas. No hay nada concluyente sobre la razón que originó a

esta nueva guerra, y solo el odio se asoma por la puerta como posible motor de las discordias entre sus dos bandos.

Todo comenzó cuando unos jóvenes, deportados de los Estados Unidos, se mezclaron con otros muchachos más jóvenes en barrios, plazas y parques. Los que bajaron del norte tenían un nuevo estilo no solo de ver la vida sino de la moda. Vestían camisas flojas, pantalones flojos, pañoletas, gorras... Los de acá se fascinaron con esa nueva moda. Que se mezclaran no fue ningún problema. El problema fue que los de aquí hicieron crecer a las pandillas de los que venían de allá. Los odios continuaron. Dos de las pandillas más peligrosas del mundo encontraron en El Salvador un campo fértil para la batalla, y el Estado se convirtió apenas en un observador silencio de esos enfrentamientos.

No está nada claro, pero si la historia reciente de El Salvador fuera una línea de tiempo, en los últimos 20 años podrían ubicarse muchos estallidos, representados por picos altos, que demuestran la evolución de las pandillas a base de peleas, cuchillos, balas y muertes. Ahí donde vivían sus miembros, las pandillas comenzaron a dominar el territorio, se expandieron, y pelearon otros territorios, a lo largo y ancho del país. Para el 2005, habían dominado las colonias de Lourdes, Colón, en La Libertad. Esas colonias que patrullamos junto a Houston y sus policías. Cinco años más tarde, en el 2010, la Mara Salvatrucha conquistó el Cantón El Guaje, el hogar de la familia de Sabine.

El ministro de Seguridad, David Munguía Payés, ha llegado a sugerir que las pandillas son un ejército que llega hasta los 70.000 miembros directos, más el aporte que dan sus familiares. El ministro es de los que creen que los familiares han dejado de ser actores pasivos en la estructura de las pandillas.

Lo cierto es que el de las pandillas no es un mundo de blancos y negros. Y es en ese gris tan confuso que se entremezclan simpatías, miedos, obediencias, abusos, extorsiones y silencios. Sobresale en ese gris confuso la clara utilización de la violencia para obtener control territorial. La población que vive en los territorios dominados por las pandillas está expuesta a normas que aunque no están escritas se cumplen al pie de la letra. “Ver, oír y callar”, es la principal, dice Sabine Moreno. Luego hay otras, muchas, demasiadas...

Si uno vive en una comunidad MS no puede transitar por la vecina comunidad 18, so pena de que cualquiera de las dos pandillas concluyan que uno es un espía...

Uno no puede ser visto hablando con la policía porque automáticamente se convierte en un sospechoso soplón...

Uno no puede tratar mal ni con miradas gestos o palabras subidas de tono a los pandilleros, porque eso les ofende...

Si uno es mujer, una corre el peligro de entregar el cuerpo a uno o varios de los miembros de la pandilla que dominan la colonia...

Cuando una clica de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha entra a un territorio y lo conquista, lo conquista todo. No está nada claro qué buscan, pero el narcomenudeo, la ganancia que deja el control de las extorsiones y la expansión territorial para hacer crecer esas dos fuentes de ingreso se asoman como posibles explicaciones. Hay otros casos, como en El Guaje, en Soyapango, en donde solo la geografía del territorio es apetecido por las pandillas.

El municipio de Soyapango, en San Salvador, por años fue considerado como la primera gran ciudad dormitorio del país. En las décadas de los sesentas y setentas allí se afincaron familias obreras que crearon un boom inmobiliario que convirtió las otroras fincas de café o caña de azúcar en laberintos inmensos adornados con diminutas casas de concreto de dos y, con suerte, tres cuartos y un patio. Soyapango es una de las ciudades más densamente pobladas del país. Es la ciudad creada para las familias obreras de la capital. Y en esa mancha de concreto son pocas las islas verdes que le sobreviven. El cantón El Guaje es una de ellas.

Cuando la Mara Salvatrucha conquistó la comunidad del cantón El Guaje, e instaló ahí una sucursal con el nombre de la comunidad en la que creció Sabine Moreno (la clica “Guajes Locos Salvatrucha”) fue porque le interesó la geografía del lugar. Le interesó lo aislado del terreno para organizar ahí reuniones con las clicas más fuertes de Soyapango y, según la policía, para dejar regadas a sus víctimas.

Lastimosamente para familias como las de Sabine, saberse conquistados siempre se explica con violencia, intimidación y muertes.

Si antes los desplazados huían de las bombas o de los reclutamientos forzados — sobre todo del Ejército, pero también de la guerrilla— ahora huyen casi que por las mismas razones. Huyen porque no quieren que sus hijos se hagan pandilleros, porque sus hijas no sean violadas o ultrajadas, porque muy cerca han impactado las balas, porque los acusan de estar con la policía o con la pandilla contraria. Eso le pasó a la familia de Sabine. Los rumores los acusaron de informar a la Policía y de ayudarlo a la pandilla contraria.

Recuerdo de Amelia, la abuela de Sabine: El Guaje era un lugar tranquilo en el que se podía vivir. Era una antigua finca, donde se asentaron unos colonos y sus descendientes desde hace más de cincuenta años. Ahora diezmada y convertida en una especie de oasis en medio dos colonias con mala fama, en el Guaje sobreviven diminutos cafetales y huertas. Rodean a esa comunidad rural las colonias Santa

Lucía y Sierra Morena. Hace siete años, esas dos colonias fueron noticia cuando por primera vez se habló en la prensa de toques de queda impuestos por las pandillas.

El 2005 fue un año de toques de queda en los barrios. Se peleaba el territorio, y las pandillas amenazaban a los habitantes de esos territorios a no salir de sus casas, pasadas las siete de la noche, para no ser confundidos con el enemigo. Al menos eso reportaba la policía. Eso pasaba muy cerca de El Guaje, que para ese momento seguía siendo una comunidad tranquila.

A El Guaje la Mara Salvatrucha llegó cuando se pavimentó el camino que conecta a Soyapango con el municipio de San Marcos. Antes quien entraba al Guaje solo era alguien que tuviera algo que ver con El Guaje. Pero a mediados de 2008, un grupo de jóvenes, extraños, circuló por esa carretera y le gustó aquello con lo que se encontró.

Recuerdo de Sabine: eran cinco jóvenes. Llegaban a la cancha de fútbol de la comunidad. Se hicieron amigos de los jóvenes de la comunidad. Fumaban cigarrillos y “le decían cosas a las bichas”.

Desde cerca, que cinco jóvenes intenten controlar una pequeña comunidad en medio de la nada puede significar muy poco. Una pandilla de barrio, una pequeña pandilla. Pero si se amplían las coordendas, esos cinco jóvenes ya no son una pequeña pandilla, sino más bien los emisarios de una organización muy grande, con nexos en todo el país, con normas en todo el país. Normas que no tardaron mucho en calar en El Guaje.

Cuando esos cinco jóvenes que Sabine recuerda llegaron a El Guaje, Remberto Morales tenía 12 años. Remberto era, según Sabine, “un niño bien, que se vestía bien, amable, que jugaba con nosotros”. Pero Remberto tomó la decisión de acatar y de hacer cumplir las normas de la Mara. Se hizo amigo de esos muchachos y entonces dejó de ser amigo de Sabine. Remberto Morales, brincado por la clica Guajes Locos Salvatrucha, se convirtió en El Panadol.

Recuerdo de Sabine: Desde que le pasó eso se hizo huraño, pasaba con el ceño fruncido y a quién le mirara mal, lo amenazaba de muerte.

No pasaría mucho tiempo cuando Sabine y su familia fueron amenazadas de muerte luego de la masacre en la que fue asesinado El Panadol.

El Salvador es un país con 6,2 millones de habitantes y en el que en 2011 hubo un promedio de 12 asesinatos diarios. Desde que los pandilleros comenzaron a ser noticia recurrente, en el año 2003, tras el lanzamiento del primer plan Mano Dura —un plan represivo que consistía en encarcelar pandilleros acusados de

“asociaciones ilícitas” – muchas comunidades, asentamientos y colonias fueron estigmatizados.

Lo que nunca nadie cuestionó fue la incapacidad del Estado que no pudo recuperar el control de esos territorios. La Policía hacía redadas en las colonias dominadas por las pandillas pero eso nunca garantizó que el Estado recuperara el control de esas zonas. Solo eso explica que para 2012, junto a ese elevado promedio de homicidios diarios, se creara una lista de 25 municipios considerados como los más peligrosos del país. Entre estos se incluye a Soyapango y Lourdes, Colón. En medio de todo ese caudal de cifras y muertos, el drama de las familias que huyen de la violencia, moviéndose de un lado a otro, como nómadas, nunca fue ni ha sido tomado en cuenta.

No hay una cifra de desplazados por la violencia en El Salvador porque simplemente el fenómeno no puede contabilizarse. No es un dato que exista porque no es un dato que se denuncie ni se sistematice, y los casos son tan complejos, y los escapes tan silenciosos, que solo los afectados saben lo que les está ocurriendo. La Policía se ve amarrada a brindar seguridad a las retiradas y luego hace conjeturas sobre las razones que llevan a una familia a abandonar su casa, sus pertenencias, su vida. Del lado de las familias, la norma no establecida dicta que nadie ponga denuncias por temor a represalias, porque lo que más quieren es desaparecer, pero con vida, no enterrados bajo tierra.

Quizá el dato que más se acerque a la magnitud del problema sea una lista de casas desocupadas que maneja el Fondo Social para la Vivienda (FSV), institución estatal que facilita préstamos para que familias de bajos recursos adquieran una casa propia. Para siete colonias dominadas por las pandillas, ubicadas en los departamentos de San Salvador y La Libertad, la cifra llega a las 613. Si el promedio de personas por familia en El Salvador es de cinco, según el censo de población de 2007, eso significa que unas 3.000 personas abandonaron su hogar, sin una razón clara.

Uno bien podría pensar que los inquilinos de esas casas se fueron porque no pudieron seguir pagando la cuota, según responden de manera oficial las autoridades de la Institución. “La norma que une a todos esos casos es que por alguna razón cayeron en mora, y eso obligó a un proceso de recuperación de esas viviendas”, dice el gerente de créditos de la institución, Luis Barahona.

Pero uno también podría sospechar que hay algo más fuerte detrás de tanta casa abandonada en esas colonias, dadas las coincidencias entre el elevado número de casas abandonadas y la fuerte presencia de las pandillas en esas zonas.

—¿Uno puede hacer esa relación simple entre casas del Fondo deshabitadas y el contexto de la colonia en donde está ubicada? ¿Uno puede decir, por ejemplo, que quienes se fueron de la Colonia Las Campaneras, dominada por el Barrio 18, se fue huyendo de la violencia de esa pandilla?

— No creemos que sea el factor principal, pero no podemos negar que en algunos casos se nos ha manifestado que se van porque se ven afectados por la delincuencia de la zona. El problema es que no estamos ante una estadística concreta, como para poder decir: es un 5% de todos los casos, un 10%. Le mentiríamos.

El Fondo Social para la Vivienda atiende a un sector de la población vulnerable, de los más pobres, para facilitarle acceso a vivienda mínima. No es la institución competente para crear una lista de casos, pero al menos reconoce que en aquellas zonas en donde tienen presencia como autoridad, compiten con la autoridad de las pandillas. A quienes solo tienen esas colonias como opción de vida, el FSV les llama: “segmento vulnerable”.

Es un círculo vicioso. Entre las ofertas de ayuda que da el FSV a aquellos que huyen de la violencia –previa comprobación con una denuncia policial- está la permuta de esa vivienda en otro sector con similares características. Eso, por defecto, y sin que la institución pueda hacer nada, incluye la presencia de alguna de las dos pandillas en el paquete de compra.

Coordenadas: es el 31 de julio de 2010. Es de noche. En el cantón Cuapa, fronterizo con El Guaje, unos jóvenes organizan un baile. Si algo puede explicar mejor hasta adónde llegó la violencia en el cantón El Guaje, para que de ahí huyeran 23 familias, fue lo ocurrido después de ese baile, al que acudieron cinco jóvenes, otrora amigos de Sabine Moreno. Uno de ellos era aquel niño que se vestía bien y que terminó, con 14 años, convertido en el pandillero “Panadol”. También iba un joven de 19 años que recién se había convertido en padre. Su nombre era Dagoberto, quien junto a una morena y pequeña joven de nombre Lucía, hermana de Sabine, había procreado a una pequeña niña que para mediados de 2010 tenía año y medio. Dagoberto, un joven inquieto, sin ideas claras sobre qué hacer con su vida, era amigo de Panadol y de los homies de Panadol.

En los territorios dominados por las pandillas, la frontera que divide la amistad, el apego y el cariño entre los pandilleros, sus familias y sus vecinos a veces es tan difusa, tan poco clara, que omite dar cualquier tipo de certezas. Esa falta de certidumbre puede conducir a resultados trágicos, potenciados por conclusiones apresuradas. A la familia de Sabine, esas conclusiones apresuradas fueron las que

la diezmaron. La única muerte que nada tuvo que ver con esas conclusiones fue la que inició la tragedia de los Moreno.

Pico en la familia de Sabine: Ernesto Quintanilla, un ex pandillero deportado de los Estados Unidos, muere asesinado el 14 de febrero de 2010.

Ernesto era un hombre tatuado y deportado. En Los Ángeles fue miembro de la Mara Salvatrucha y ni Sabine ni su madre pueden precisar de cuál clicca era Ernesto. Lo cierto es que en el año 2000, Ernesto llegó a vivir a El Guaje, porque en El Guaje vivía el único familiar que lo ataba a El Salvador. Vivió en paz Ernesto, sin meterse con nadie, escondido en esa zona rural rodeada por colonias de concreto, hasta que una clicca de la MS comenzó a visitar la colonia. La clicca lo ubicó, le pidió que hiciera cosas, pero Ernesto se negó. Por eso lo mataron, porque es muy difícil que un pandillero retirado pueda vivir tranquilo sin hacer cosas por el barrio.

Recuerdo de la madre de Sabine: su hermana se puso muy triste. Nunca pensaron que esa sería la primera de muchas muertes, porque siempre creyeron que lo que le ocurrió a Ernesto no tenía nada que ver con ellas.

El problema es que otro familiar hizo que tuviera mucho que ver.

Pico alto en la vida de la familia Moreno: José Mena desaparece en abril de 2010.

José Mena era un vendedor de muebles de madera que se crió en el Guaje y terminó casado con Beatriz Cruz, una mujer risueña que vivía de lavar trastos y cocinar sopas en un mercado. Beatriz Cruz era tía de Sabine Moreno.

José Mena y Beatriz Cruz frecuentaban mucho la casa de Ernesto Quintanilla, un ex pandillero de la MS deportado de Los Ángeles, porque José y Ernesto, con el tiempo, se hicieron buenos amigos. El dolor que le provocó la muerte de Ernesto hizo que José perdiera la compostura. En la tienda de la comunidad, José dijo que sabía que los muchachos de la pandilla tenían que ver con el asesinato de Ernesto. A José, a los días de andar haciendo esas acusaciones, se lo tragó la tierra. Desapareció sin dejar rastro. A oídos de la madre de Sabine Moreno llegó el rumor de que el joven Panadol y el resto de miembros de la clicca Guajes Locos Salvatruchos habían asesinado a José en el cafetal, y que le habían obligado a cavar su propia tumba. Pero Blanca fue astuta. Escuchó el rumor y calló.

El cafetín en el que José Mena acusó a los pandilleros por la muerte de su amigo Ernesto Quintanilla, era regentado por Fidelina y Yesenia Moreno, prima y sobrina de Mauricio, el abuelo de Sabine. Era ese un cafetín modesto, en el que se vendían almuerzos y se cocían pupusas. Era ese un cafetín frecuentado por todos: vecinos, amigos, pandilleros y policías. Pero que los policías lo visitaran, lejos de traer seguridad, solo provocó otra desgracia para la familia Moreno. Como los rumores

pueden ser una suerte de verdades para aquellos que se los creen, Fidelina y Yesenia recibían en ese lugar a los policías para contarles de las andadas de los pandilleros de El Guaje.

Pico alto en la familia de Sabine: en la mañana del 16 de junio de 2010 fueron asesinadas Fidelina y su hija Yesenia.

Las acribillaron en medio de la carretera, antes de que prepararan su puesto de venta de pupusas. Por ese asesinato, Mauricio Moreno, el abuelo de Sabine, comenzó a tomar de nuevo.

El baile en realidad no era un baile sino que una emboscada. Así como la MS se tomó El Guaje y reclutó pandilleros en El Guaje, el Barrio 18 hizo lo mismo en un cantón aledaño a El Guaje: el cantón Cuapa. Muy tarde lo comprendieron los cinco jóvenes que iban hacia aquel baile.

A las 11 de la noche de aquel sábado 31 de julio, la puerta de la viuda de José Mena, fue sacudida por una lluvia de golpes y gritos.

—¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta!— gritaban los jóvenes.

Beatriz se sorprendió al ver, en la cabeza de aquel grupo asustado, a Dagoberto, el marido de Lucía, su sobrina. Beatriz los dejó pasar, y no pasó mucho tiempo cuando otra lluvia de golpes sacudió de nuevo la puerta.

Cuando Beatriz abrió de nuevo, fue abatida por un empujón, y solo alcanzó a ver a unas sombras desconocidas que Apalearon uno por uno a los jóvenes.

Recuerdo de Blanca, la madre de Sabine: Beatriz, su hermana, nerviosa y asustada, sacude la puerta de su casa y le cuenta lo sucedido. Le dice que la empujaron y que se los llevaron con las manos amarradas con las cintas de los zapatos. Luego Beatriz regresó a su casa, a trancar muy bien las puertas, y retornó donde Blanca todavía más afligida.

Recuerdo de Sabine: ella estaba dormida y la despertaron unos disparos. Al rato llegó Beatriz, gritando: “¡Ya los mataron, Blanca! ¡Escuché unos gritos por el maizal”.

Los gritos fueron seguidos por unos disparos, los disparos que despertaron a Sabine Moreno.

A la mañana siguiente, esa masacre en El Guaje fue noticia a nivel nacional. Dagoberto, el cuñado de Sabine, padre de una bebé recién nacida; Remberto, el otrora amigo de Sabine, convertido en el pandillero Panadol, fueron asesinados. De

los cinco, solo Dagoberto, que no era pandillero, sino que amigo de pandilleros, conservó intacta la cabeza.

Recuerdo de Sabine: a los demás les cortaron la cabeza y les cortaron sus partes íntimas. Luego las partes íntimas se las metieron en la boca.

Corrección de Amelia: solo a uno de ellos, le arrancaron sus partes íntimas para metérselas en la boca.

Un mes después de esa masacre, las conclusiones apresuradas volvieron a enlutar a la familia de Sabine. El rumor decía que Beatriz Cruz había “vendido” a los cuatro miembros de la clica Guajes Locos Salvatruchos con la pandilla rival. Los rumores decían que quienes llegaron a sacarlos de su casa no eran policías, sino pandilleros del Barrio 18, disfrazados de Policías, y alertados por Beatriz. Para la madre de Sabine, esos rumores guiaron a un desconocido hasta el mercado en el que trabajaba su hermana.

Pico alto en la familia de Sabine: el mediodía del 28 de agosto de 2010, Beatriz Cruz fue asesinada a los pies de una cantarera.

Dos días después, una amenaza recorrió por todo El Guaje. Aquellos que no tuvieran familiares pandilleros debían salir de la comunidad o de lo contrario serían exterminados. El mensaje llevaba una dedicatoria expresa a la familia de Sabine. Dicen que el papel decía: “empezando por toda la familia de Mauricio Moreno...”.

Mauricio Moreno era un hombre que no le temía a las serpientes. Lo dice su mujer, Amelia de Moreno. Lo dicen tres fotos que la familia conserva en un álbum. En las fotos, tomadas en diferentes momentos todas, Mauricio alza tres diferentes mazacuatas, unas serpientes que pueden alcanzar los dos metros de largo. En las fotos, Mauricio sonrío. Se le ve contento.

Tras la muerte de Beatriz, pasaron tres meses en los que ocurrió muy poco en El Guaje. Mauricio Moreno pensó que había zanjado el problema denunciando a la Policía lo expuesta que estaba su familia después de tantos asesinatos y amenazas. La policía entonces patrulló un par de veces a la semana pero en noviembre dejó de hacerlo. Y Mauricio, que durante todo ese tiempo siguió tomando, y en más de alguna ocasión profiriendo amenazas, diciendo que haría justicia con sus propias manos, retó a los mareros.

No pasó ni una semana cuando él también cayó muerto.

El primer refugio fue un infierno.

Recuerdo de Sabine: lloviznaba. El camión los aventó en una calle frente a una gruta, a la orilla de un río. Ella no sabía ni siquiera cómo se llamaba ese lugar, pero sintió que en nada se comparaba al lugar en el que vivían, porque el frío en esa montaña calaba hasta los huesos. Llegaron a esa gruta por sugerencias de otra vecina que también había huido del Guaje, tres meses antes de que ellos.

Esa vecina, esa amiga, a la mañana siguiente, cuando se enteró del arribo de la familia de Sabine, fue a darles abrigo. Les cocinó salchichas con huevo y tomate. Sabine recuerda que la tristeza, la rabia, el enojo, le quitaron el hambre. Quería largarse de ahí, y entonces supo que no tenía ningún otro lugar adónde ir.

¿Cuántas familias son desplazadas en El Salvador? La respuesta a esa pregunta podría ser una incógnita para siempre. Lo cierto es que mientras más se pregunta, mientras se revuelve entre las historias de amigos y conocidos, siempre aparecen muchos casos. Demasiados.

Caso 1: Jaime, un policía de Soyapango, ahora asignado a otra unidad, huye a mediados de 2011 de la colonia en la que compró su casa porque se descubrió vecino de pandilleros del Barrio 18. Al principio trazaron un pacto de caballeros, pero a medida que la convivencia convirtió esa frontera imaginaria, en un barril en el que pueden despojaron todas las rencías, Jaime prefirió huir. Ya había amenazado con una pistola y no quería sacarla por segunda vez. Temía que lo mataran o terminar preso por el simple hecho de defenderse de aquello que él consideraba como una amenaza.

Recuerdo de Jaime: una noche de mediados de 2001 tomaba con un vecino, en la tienda de la colonia, cuando sus vecinos pandilleros, también embriagados, llegaron a preguntarle si él era de los policías que mataban homies. Jaime, que estaba sentado, se paró y sacó su pistola. Se volvió a sentar y la posó en su pierna derecha. “Si quieren probamos”, les dijo.

Al día siguiente recibió un anónimo debajo de la puerta de su casa: “o te vas o se mueren vos, tu mujer y tus dos hijos”.

Jaime lo dejó todo, todavía intenta vender la casa y ahora alquila otra en otro municipio, en otro departamento.

Caso 2: Carolina nació, creció y se desarrollo en una comunidad dominada por la Mara Salvatrucha. Esa frontera gris que obliga convivir con pandilleros, compartir con ellos, respetarlos a ellos, terminó definiendo el amor de Carolina hacia uno de

esos pandilleros. Carolina se hizo su mujer y tuvo un varón de esa relación. Cuando el niño tenía dos años, su padre cayó preso.

Recuerdo de Carolina: su marido la obligó a visitar el penal de Ciudad Barrios, al oriente del país, todas las semanas, y en cada visita la obligó a meterse droga y chips de celulares en la vagina. A mediados de 2009, unos custodios la descubrieron con un paquete de marihuana que llevaba en la vagina. Se le cayó después de que la obligaron a hacer 100 cucullas. Fue encarcelada seis meses en el penal de Mujeres, en el municipio de Ilopango. Cuando salió, los pandilleros de la colonia la llegaron a buscarla hasta su casa. Le dijeron que debía continuar con las misiones. Carolina se negó, la golpearon enfrente de su hijo. La dejaron malherida.

Carolina decidió largarse de su casa, abandonar a su familia, y cargar con su hijo, hoy de cinco años. Alquiló una casa en el departamento de Santa Ana, al occidente del país, pero hasta allá la persiguió la pandilla. Alguien la denunció como desaparecida y en agosto de 2011, colgó su imagen en el noticiero 4 Visión, uno de los de mayor rating. Al siguiente día, una vendedora de celulares, mientras ella cargaba su saldo, la reconoció y le preguntó que por qué se había fugado de su casa.

Recuerdo de Carolina: caminó de regreso a su casa, junto a su hijo, mirando a través del rabillo del ojo. Cruzó el centro de la ciudad, llegó al mercado, lo atravesó, y por todo ese trayecto sintió que alguien la perseguía. Al día siguiente se dio cuenta que la vendedora no guardó su secreto, y que incluso distribuyó su celular. Lo supo porque alguien marcó a su teléfono, y antes de que esa voz terminara de decir: “Al fin te encontramos, bicha hija de...”, ella aventó el aparato en un basurero del parque central. Carolina se movió a otro departamento, al norte del país, y desde ese departamento se cruzó, ilegal hacia Guatemala. Ella no piensa regresar.

Caso 3: A Juan lo acaban de amenazar de muerte. Lo han amenazado sus propios sobrinos, que ahora caminan con la Mara Salvatrucha. Juan vive en una comunidad al occidente del país, y no sabe qué hacer con su vida. Entre sus alternativas todavía no contempla huir, porque dice que adonde quiera que vaya pasará lo mismo.

—Las pandillas están en todas partes. Tengo dos lugares adónde ir, pero en esos dos lugares también hay pandillas. A lo mismo voy a ir a dar —dice Juan.

—¿Y entonces qué piensa hacer?

—Esa es la cuestión. Yo no quiero perder todo lo que tengo acá, así que a lo mejor me toca defenderme por mis propios medios. Porque a uno, de pobre, ¿quién va a venir a prestarle ayuda?

El segundo refugio fue toda una molestia. La familia de Sabine se movió a la orilla de un río, porque 20 personas no pueden vivir sobre un camino vecinal, interrumpiendo el tráfico de vehículos, más de dos días. Por eso al segundo día los hombres levantaron unas chozas con techos de aluminio encima de unas peñas gigantescas. No tenían agua para beber ni para lavar la ropa y la del río no daba consuelo porque estaba y sigue contaminada. No tenían en qué cocinar la comida porque todos los utensilios quedaron en la casa que dejaron en El Guaje. No tenían en dónde hacer sus necesidades, más que en un hueco pestilente que quedaba entre los peñones del río.

—Pasamos dos semanas serenándonos... Mire: sufrir así, esto no se le desea a nadie
—dice Sabine.

El tercer refugio es una champa protegida detrás de un portón de hierro largo y alto. Este pedazo de tierra que no es suyo, que nunca será suyo, era el parqueo de otra familia que les ha brindado cobijo.

En la sala hay un sillón largo, dos sillas de plástico y aquel televisor que Sabine logró rescatar en la huida de El Guaje. El sillón, las sillas plásticas, las láminas, la cocina de leña, la mesa del comedor, son cosas que ha tocado conseguirlas a base de sacrificios que Sabine y su madre no tenían contemplados. Aquí no hay trabajo para ninguna y les toca sobrevivir vendiendo pastelitos rellenos de papa y empanadas de plátano a sus vecinos, entre los que se encuentran otras tres familias de refugiados de El Guaje.

La sobrina de Sabine, la hija de Remberto, el joven asesinado junto a otros cuatro pandilleros justo hace dos años, enciende el televisor. Están pasando la caricatura de Bob Esponja.

—¿Ustedes quieren regresar? —preguntamos.

Sabine contesta: por mí yo quisiera estar en mi lugar otra vez, pero es imposible regresar. Las casas de nosotros ya están ocupadas por gente de los mismos pandilleros. Ellos se apoderaron de ese lugar.

En marzo de 2012, ocurrió un suceso inédito en El Salvador. El gobierno hizo un pacto con la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13 que consistió en la reducción de los homicidios a cambio de traslados de los líderes de las pandillas de penales de máxima seguridad a cárceles con menores restricciones.

Los traslados de 30 líderes de la pandilla coincidieron con la reducción significativa de los homicidios. A un mes de la tregua y de esos traslados, los homicidios se desplomaron en un 59%, de 13.6 a 5.6 diarios. Reducción que para agosto de 2012 se mantiene. Si la tendencia se mantiene, El Salvador se alejaría muchísimo de la tasa de muertes con la que cerró 2011 (76,3 homicidios por cada 100.000 habitantes), y que lo ubicaron como el segundo país más violento del mundo, solo superado por Honduras, que registró 82 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Mauricio Funes, negó la existencia de tal pacto, pero desde entonces ha caído en una suerte de contradicciones al tiempo que se ha comprometido a buscar apoyos en los partidos políticos, la empresa privada y la sociedad para acabar de una vez por todas con la violencia entre las pandillas.

Oficialmente, lo que ha ocurrido en El Salvador es una tregua entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha respaldada con el apoyo logístico del gobierno.

Pico alto para El Salvador: después de años de violencia, hoy es tiempo de tregua entre las pandillas.

—¿La tregua no les anima para regresar a sus casas?

Comentario de Sabine: esa tregua es mentira y para nosotros no sabe a nada. Nadie revivirá a mis familiares muertos y nadie nos garantiza que podemos regresar, y estar sanas y salvas, en nuestro lugar de origen.

La estampida del miedo en la frontera colombo-venezolana

Por Verdad Abierta



Aunque ya no son las masas de hace una década, aún demasiados colombianos que habitan en los límites entre Colombia y Venezuela se están viendo forzados a huir de sus hogares para escapar de la violencia del viejo conflicto armado y de nuevas mafias criminales.

Entre 2008 y 2011 se desplazaron en Norte de Santander más de 27.000 personas, y en el primer semestre de este año ya iban casi 1.000 personas que se han tenido que ir de sus hogares de afán en grupos grandes, y muchas decenas más en forma individual.

VerdadAbierta.com conversó con algunas personas en plena huída, constató como el conflicto entre el Estado y las guerrillas sigue forzando a la gente a desplazarse y cuenta qué tiene que ver el narcotráfico en todo esto.

¿Por qué no paró el desplazamiento?

Entre 1998 y 2005, en Norte de Santander, el más poblado departamento al oriente colombiano, pegado a Venezuela, una brutal ofensiva las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se definían como una fuerza ilegal contrainsurgente, invadió pueblos y veredas, asesinó, quemó, aterrorizó, y obligó a 114.000 hombres, mujeres y niños a salir despavoridos para salvar sus vidas. Estos paramilitares querían, sobre todo, arrebatarse a las guerrillas las ganancias de la exportación ilegal de cocaína por la lucrativa ruta venezolana. Este negocio es más atractivo en esa parte del país. Allí, en la selva del Catatumbo, crece frondosa la coca y se recogen seis cosechas y medio al año. Además, como son subsidiados por el gobierno de Venezuela, la gasolina y otros insumos químicos, como el cemento y la acetona, que se usan para extraer la cocaína de la hoja de esa planta, resultan particularmente baratos. En esta frontera porosa de 376 kilómetros, además, son fáciles todos los contrabandos, desde carbón hasta ganado y es sencillo esconder cargas ilícitas y escabullirse cuando el brazo de la ley actúa. Los paramilitares

buscaron también suplantar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un territorio a donde habían sido fuertes por más de dos décadas. Y al igual que en el resto del país, eso incluía capturar a los gobiernos locales para conseguir rentas fáciles y robar tierra para montar sus agroindustrias y haciendas ganaderas. Debido a una negociación entre el gobierno nacional y las AUC, éste grupo dejó las armas desde 2004. En noviembre 25, los 1.425 integrantes del Bloque Catatumbo se desmovilizaron oficialmente.

Los nortesantandereanos creyeron que eso marcaba el fin de su tragedia; que había llegado el tiempo de reconstruir. El gobierno, acatando una enérgica sentencia de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la población víctima del conflicto armado también de 2004, comenzó a mejorar sus sistemas de atención y de ayuda a los desplazados. Eran insuficientes, pero en las comunas 6, 7 y 8 al norte y al occidente de Cúcuta, la capital del departamento, a donde habían llegado miles a levantar sus improvisados ranchos, el Estado y las organizaciones civiles, como los sacerdotes católicos Scalabrini y otros voluntarios italianos, alemanes y venezolanos, venían construyendo barrios, ampliando cupos escolares, montando centros de salud. Si la avalancha de desplazados hubiera terminado ahí, seguramente hoy ya habría tranquilidad, pero no fue así.

Pronto mandos medios de las antiguas autodefensas que no dejaron las armas reorganizaron sus bandas criminales al servicio de los negocios ilegales de la frontera que nunca dejaron de fluir. Grupos de otras partes del país llegaron a la lucrativa zona. Para 2007, entre locales y foráneos, ya había en la frontera varios grupos aterrorizando a la gente: Urabeños, Rastrojos, y últimamente, una banda que quiere tener apellido pseudo-político y se hace llamar las Autodefensas de Norte de Santander. Hoy estas bandas están desplazando familias trabajadoras que viven al límite entre los dos países, desde Puerto Santander al norte de Cúcuta, hasta Ragonvalia en el sur. También está desplazando a la población civil al norte del departamento la vieja guerra colombiana, por la cual la fuerza pública intenta sacar a las guerrillas del norte selvático del territorio. En El Tarra, norte de Tibú, San Calixto, Teorama y Ocaña, a cada envión del Ejército, la guerrilla siembra más minas en el campo, y dinamita más estaciones de policía y bases militares, muchas de las cuales están en medio de las casas de la gente. Evitando quedar entre fuegos cruzados, las familias huyen, se mudan de zona, van y vuelven, y pasan hambre y a sus hijos les queda marcado el miedo.

La gente sigue huyendo:

Cuentan que en los peores tiempos, por allá entre 1999 y 2002, cuando la arremetida violenta de los paramilitares de las AUC en el Catatumbo, esa selva

entre Colombia y Venezuela al norte del departamento de Norte de Santander, expulsaba diariamente a cinco familias por día de Tibú y a dos de El Tarra, los niños, apostados sobre las pilas de hoja de coca, ponían en la mira imaginaria de sus palos al transeúnte, mientras gritaban el traqueteo de las metralletas.

Una década después, esos paramilitares ya no existen pues dejaron las armas a fines de 2004, pero a esos niños que jugaban a imitar a los guerreros no les mejoró mucho la vida. Menos de la mitad de los que viven en el pueblo El Tarra completan la primaria, y apenas el 14 por ciento terminan el bachillerato. Allí y en Tibú, la mayoría de los jóvenes no saben hacer mucho y tienen poco para hacer. Pueden meterse a raspachines –como se le dice en Colombia al oficio cosechar la hoja de coca – porque hay coca sembrada en más de 3.000 hectáreas; los ejércitos legales e ilegales se los pelean. Faltan las vías, beben agua mala y los esfuerzos oficiales por brindar salud y educación son como remiendos que no alcanzan a cubrir los agujeros de la pobreza.

El nuevo gobierno ha reforzado batallones y bases militares que intentan mantener a raya a la guerrilla que acecha, intentando recuperar el territorio perdido en Catatumbo. En El Tarra abundan los uniformados, hay una estación de policía y una base militar. También hay otra a cuatro minutos en automóvil, en una aldea llamada Motilonia (los colonos de la región llamaron motilones a los indígenas Bari por la forma en que se cortaban el pelo). Desde El Tarra, el ejército intenta con dificultad avanzar selva adentro, pues la guerrilla bloquea rutas, siembra minas, lanza explosivos y protege sus cultivos ilícitos a muerte.

En diciembre de 2011 las FARC lanzaron una granada contra la estación de policía; en enero y febrero de 2012 hubo 13 combates en la zona rural y según actores humanitarios de la región, unas 800 personas salieron de sus casas buscando refugio. Algunos se desplazan por unos días, se refugian incluso en la casa del personero o del alcalde, y después regresan a sus casas.

“Huir es una estrategia de protección de la gente”, dijo una persona que atiende la catástrofe humanitaria en la región. En marzo pasado, en San Pablo, Teorama, otro municipio de Catatumbo, iba entrando la fuerza pública este año y la guerrilla la atacó. Hubo varios muertos y heridos, entre ellos una mujer y un bebé. La población huyó, pero para cuando llegó la ayuda de emergencia, ya la gente había vuelto a sus casas. En esos días de terror, sin embargo, cuando más necesitaron atención médica y psicológica, alimentos y abrigo, no hubo nadie que los auxiliara.

El 14 de mayo, como a las 11 de la mañana, se armó la balacera en Filo El Gringo, otro pueblito de El Tarra. Las FARC tiraron un cilindro explosivo contra el puesto móvil del Ejército que queda enfrente a la escuela primaria. Los militares abrieron fuego y la escuela llena de niños quedó en medio del tiroteo. Por años la escuela

había estado vacía, después de que en 2001 las autodefensas sacaran corriendo a las familias de este corregimiento ejemplarmente organizado y bonito, quemando sus casas y amedrentando a todos. La gente progresista de Filo El Gringo comenzó a retornar en 2008, pero ahora la guerra ha vuelto a aterrorizarlos y los niños no quieren volver a estudiar.

El pasado 11 de junio, luego de un ataque a la base militar de Motilonia que destruyó varias casas de la gente, 33 familias salieron corriendo hacia el pueblo. Al poco tiempo todas las familias de esa vereda, unas 86 en total, huyeron “por físico y mero miedo”, como dijo el personero Alexander Collantes al diario local, La Opinión, y se refugiaron en una finca que tiene la Alcaldía pegada al pueblo. Diecinueve niños no quieren volver al colegio, dice un funcionario que los atiende, tienen pesadillas cargadas de olor a pólvora y algunos se orinan en la cama.

La ironía de Motilonia, como dijo un entrevistado con sonrisa agria, es que es casi la única vereda del Catatumbo donde la gente no vive de la coca. Allí las familias aprendieron a cultivar el pescado cachama en estanques. Durante el día la gente ha seguido yendo a ver sus cachamas, pero éstas no reciben el cuidado que requieren y además el zumbido de las balas y estruendo de las explosiones las aturde y no engordan como deberían.

Víctor Ramón Navarro, conocido como Megateo, jefe de frente del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991, sobrevivió la invasión paramilitar y ha construido un poder considerable sobre la base de un narco-emporio y la ejecución de obras públicas y sociales en beneficio de la comunidad. En el territorio bajo su dominio, el número de personas forzadas a desplazarse ha sido constantemente alto en los últimos años.

De Tibú, por decirlo así la capital del Catatumbo, también están huyendo, de a diez personas por mes, según reportó a fin de junio La Opinión. Pero allí no es la guerra la que desarraiga y desplaza, sino son las bandas de criminales que extorsionan y matonean para conseguir dinero rápido de quienes lo han conseguido con años de trabajo. En Tibú un grupo de delincuentes que dice ser de los Rastrojos, el ejército privado creado por un narcotraficante del departamento del Valle al sur del país hacia 2004, es el que extorsiona. La gente no los denuncia porque desconfía, sabe que siempre hay infiltrados en la fuerza pública. De vez en cuando la policía da un golpe, y captura a unos cuantos criminales, pero la fila de jóvenes dispuestos a reemplazarlos es larga, pues hay mucho dinero en juego, y salvo su desdichada vida, tienen poco que perder.

Dijo un especialista en desarrollo rural que conoce bien la zona, que el narcotráfico se ha ido comiendo al Estado y a las mismas guerrillas como el comején devora la madera en estas tierras tropicales, y cuando hay debilidad en la jefatura, cualquiera

hace lo que le dé la gana. Así, cada petardo aparece como hecho terrorista, cuando detrás hay pleitos de negocios por el tráfico ilegal de gasolina, químicos para preparar la cocaína, fertilizantes, lavado de dineros, en los que también están involucrados agentes estatales.

El desplazamiento forzado por el crimen

Puerto Santander, un municipio al norte de la zona metropolitana de Cúcuta es algo así como la puerta de entrada del comercio ilegal a Venezuela. Allí el ambiente es aparentemente tranquilo y las cifras oficiales de desplazamiento son bajas. No es porque haya paz, como dice un oficial de la policía, más bien es porque allí el dominio de Los Rastrojos es casi absoluto.

Sin embargo, de sus veredas, como hormigas van saliendo personas que se van volviendo incómodas para los hombres armados. Es lo que sucedió con Adolfo y Rosita [los nombres han sido cambiados por razones de seguridad]. Él un modestísimo tejedor de mimbre y fabricante artesanal de zapatos y ella una líder innata que no sabía que lo era, se instalaron en esa aldea y poco a poco fueron haciéndose a un pequeño capital. Primero tenía Adolfo que caminar para vender los zapatos y las sillas por todas esas veredas. Después ya pudo comprar su bicicleta y ahí empezó a rendirle más el dinero y mejoró su rancho. Vinieron los hijos y por una docena de años vivieron tranquilos, prosperando. Los vecinos les propusieron que se metieran a la junta comunal y después, cuando él resultó elegido edil, su mujer entró también a la liderar la comunidad.

“Los paramilitares se desmovilizaron en el 2004, pero ellos dejaron otra gente, como haga de cuenta yo irme y dejar a los hijos que sigan trabajando aquí este tallercito, porque eso fue lo que pasó”, dijo el zapatero a VerdadAbierta.com. (vea el video donde cuenta su historia).

Esa gente que dejó los ‘paras’ puso a uno de los suyos de presidente de la junta de acción comunal, y los vecinos de la vereda no volvieron a las reuniones. Los pistoleros entonces culparon a Rosita de haberlos instigado en contra de ellos. La tensión subió a medida que motociclistas armados venían a preguntar por ella cada vez más seguido. Al final, Adolfo y Rosita salieron y dejaron todo tirado. Se instalaron en otro municipio de Norte de Santander, a empezar de cero. Lograron malvender la casita después de unos meses, y el gobierno le dio a Adolfo el equivalente a unos 700 dólares para que montara su taller. Apenas si le alcanzó para comprarse un calentador que derrite la goma con que le pega la suela a los zapatos y algunos instrumentos básicos. Paga arriendo y se arriesga a viajar a Catatumbo porque por allá puede vender mejor sus zapatos: sus sandalias a 12.000 pesos (US\$6.60), botas de jean, a 15.000 pesos (US\$8). Si tuviera un cliente fijo,

quizás podría salir de la pobreza en que lo dejaron. Pero Adolfo no se queja, al menos no le mataron a ningún hijo.

“El gobierno cree que uno con un millón de pesos (US\$555) va a montar empresa, tiene que estar muy de buenas y ganarse la lotería”, dijo Adolfo con pesar. Todas las ferias y capacitaciones que le han dado no le devuelven su taller bien montado, ni la buena vida que habían construido con su esposa y que tuvieron que abandonar. Los muchachos criminales que los forzaron a salir siguen allí en su vereda como si nada.

En un corregimiento a menos de dos horas de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, un departamento de millón y medio de habitantes, la extensa familia de Chepe venía prosperando en paz, hasta que llegó el día de la madre. [Su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.] Él había comenzado con un lote que le dio la reforma agraria hace 39 años, y después con esfuerzo fue comprando lotes vecinos para sus siete hijos. En lugar de estudiar, ellos prefirieron el campo, aprendieron a cultivar el arroz, y entre todos, tomaron créditos y compraron maquinaria, una combinada que sirve para arar y cosechar, y varios tractores. La modesta y amplia casa de los padres servía para los encuentros de la extensa familia que se multiplicó hasta sumar 33 personas, entre ellos, 16 niños.

Las bendiciones, Chepe las supo repartir entre los vecinos. Formaron juntos una cooperativa productora de arroz para sumar fuerzas. Seis mujeres dieron a luz en su carro, que servía de improvisada ambulancia veredal. Quien quisiera tenía siempre un viaje gratis cuando Chepe, salía en su camioneta, y no son pocos los parceleros a quienes este campesino sonriente les prestó sin cobrarles su combinada para darles una mano con sus cultivos. “Son de lo mejor entre la gente de esa región, trabajadores y honrados”, nos dijo a los reporteros de VerdadAbierta.com, un vecino del lugar que alguna vez le hizo un trabajo.

Todavía se les asoman las lágrimas a los ojos, no sabe uno si de rabia o de tristeza, cuando cuentan el día del ataque en mayo pasado. El almuerzo para celebrar el día de la madre ya había pasado, y sólo quedaba parte de la familia y algunos niños en la casa paterna. De pronto sintieron ruidos y empezó la balacera. La señora de Chepe salió corriendo a cerrar la puerta, y cruzándose por entre las balas que perforaban el metal y las paredes, levantó un colchón y se lo arrojó encima a los niños para protegerlos.

Después se escuchó el estallido de la granada. Los niños lloraban bajito, aterrorizados. A los atacantes –dicen ellos que quizás eran como 15, una jovencita incluida– se les debió estrellar la granada contra una reja alta que protegía la casa y

se les devolvió y debió herir a algunos, porque después de lanzarla, salieron corriendo y unos iban cojeando. Los hijos que escucharon los tiros y las explosiones desde las casas vecinas corrieron a socorrerlos, pero ya se habían ido los maleantes. Aterrorizados partieron todos, con mujeres, niños, con algunas cobijas y lo que pudieron meter en la camioneta que también había salido averiada por la granada. Esa noche durmieron en la sede de la alcaldía y al día siguiente se instalaron en una escuela, mientras pensaban qué hacer.

El asalto fue sorpresivo pero los perpetradores no. En las semanas anteriores, en tres ocasiones, un par de muchachos en motocicleta y armados, habían venido a advertirles a Chepe y a sus hijos que debían darles cinco millones de pesos mensuales o si no que se atuvieran a las consecuencias. A él le hubiera gustado poder pagar por su tranquilidad, pero no podía. Con los precios del arroz por el piso, apenas si le queda para cumplir sus pagos a los bancos que financian sus cultivos. Hacía unos años ya le había pasado algo similar, y entonces acudió al Gaula (policía especializada en secuestro y extorsión) y cogieron a los bandidos. Ahora da más miedo. Seis familias cercanas de El Zulia tuvieron que huir a Venezuela cuando fueron extorsionadas por la misma banda. Un jovencito de 14 años que intentó proteger a un familiar lo asesinaron.

Es desesperante ver a este campesino exitoso, trabajador, autónomo, pasando penurias con sus hijos y nietos, arrinconados en una escuela hace casi dos meses. Para comer tienen lo que les regala la Alcaldía, mientras su maquinaria agrícola por la que están pagando a crédito está ociosa. La policía les dijo que se devolvieran a su casa, que ya habían capturado al jefe de la banda, pero Chepe intentó regresar y vio pasar de cerca a dos de los motociclistas sospechosos. Al contrario de los jóvenes sinvergüenza que les querían robar el producido de su trabajo, Chepe y sus hijos sí tienen una vida buena que perder, y por eso no se arriesgan a volver. Sueñan con irse lejos, a donde no tengan que aguzar el oído para adivinar si el ruido de la moto que se acerca significa que han vuelto para matarlos. (ver entrevista con Chepe en video).

“No es coincidencia que saquen a la familia de Chepe de la región, es una manera de mandarle a todos los demás un mensaje de intimidación. ‘¿Si la más prestigiosa y fuerte familia de la vereda la atacaron así, qué nos pasará a nosotros si no pagamos?’, se preguntarán los vecinos”, dijo una funcionaria de Cúcuta con una larga experiencia en la atención a desplazados.

El coronel Álvaro Pico, experto en inteligencia que hoy comanda la Policía de Cúcuta y de su área metropolitana le aseguró a VerdadAbierta.com que ya ha puesto tras las rejas a 180 maleantes de los grupos que sucesivamente han ido apareciendo desde la desmovilización de las AUC. Primero hubo Águilas Negras, después los Rastrojos se hicieron dueños del bajo mundo de las ciudades y cuando

éstos fueron golpeados, los Urabeños, otro grupo fundado por un jefe de las AUC que tuvo poder en el golfo de Urabá, en la costa Caribe colombiana, llegaron a ocupar el lugar.

Las utilidades del negocio del tráfico de estupefacientes alcanzan para financiar varias generaciones de jóvenes ambiciosos o confundidos o misérrimos para que sean la carne de cañón del fabuloso negocio. Las 3.490 hectáreas de coca que, calculó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, había en el Catatumbo en 2011 produjeron poco más de 17 toneladas de cocaína pura, que en Colombia tuvieron un precio de mercado de 42 millones de dólares, los que se volvieron unos dos mil millones de dólares en la calles de las ciudades estadounidenses.

La provisión de precursores químicos también deja ganancias gordas. Según los cálculos de la Policía, los Rastrojos le sacaron en 2010 un promedio de 1.000 millones de pesos mensuales – US\$unos 580.000 – a la venta de gasolina. La diferencia del precio entre Colombia y Venezuelahace que este insumo común para el procesamiento de la hoja de coca sea otro negocio. Del lado colombiano la gasolina cuesta 16 veces más que del otro lado de la frontera.

Por momentos, las ganancias de la cocaína han mermado. Por ejemplo, en 2006, después del retiro de los paramilitares quienes habían extendido el cultivo de coca hasta cubrir casi 10 mil hectáreas, el área sembrada disminuyó veinte veces, y las ventas quedaron reducidas a menos del 10 por ciento de los años de la bonanza de las AUC. En los siguientes años, para compensar, los cultivadores casi en su totalidad auspiciados por lasFARC, consiguieron sacarle más cosechas al año a cada cultivo –en promedio 6,2– y mejorar la eficiencia, según explicó un funcionario del programa gubernamental de erradicación de cultivos a VerdadAbierta.com. Pero para 2009, el área cultivada se volvió a extender y el mercado floreció de nuevo.

Cuando el mercado baja, los pistoleros de las bandas criminales buscan dinero fácil en los barrios; empujan la droga, roban y extorsionan a quiénes ven como presa fácil. Eso está forzando a mucha gente que no puede o no quiere pagar a salir huyendo hacia Venezuela, hacia otros pueblos del mismo departamento o a otros barrios de la misma capital. Con el éxodo de la gente buena, los malos se hacen más fuertes, y el poder los va llevando a abusar más: a sacar a alguien que no quiso entregarles un hijo para su grupo o a otro que vive justo donde quieren abrirle paso a una ruta clandestina de contrabando.

“Después de 2004 sí disminuyó la violencia, pero hacia 2007, empezó otro fenómeno muy claro que tiene que ver con el tema de droga, liderazgo y venta”, dijo a VerdadAbierta.com un educador de la Ciudadela Juan Atalaya, integrada por

barrios donde la tercera parte de la población son personas que llegaron huyendo por sus vidas. Es su forma de decir que ahora hay pugnas barriales por el control del micro-tráfico de bazuco y cocaína, un crimen que echó raíces en Cúcuta en los tiempos en que el negocio internacional había decaído.

Las cifras demuestran que Cúcuta, una ciudad luminosa donde se aguanta mejor el calor por la brisa constante, es el gran receptor de los desplazados del departamento, pero también el gran expulsor. La extorsión, la amenaza, el ambiente sórdido que se teje alrededor de los negocios ilegales, empujaron en 2010 a 500 cucuteños a dejar sus hogares, o por lo menos esos son los casos registrados por el gobierno. Ese mismo año llegaron a la ciudad otras 724 personas huyendo de otra parte. Desde 2005 hasta el 31 de marzo de 2011, el gobierno registró 22.669 personas que llegaron desplazadas a la ciudad capital, y cuatro de cada diez de estas eran jóvenes y niños.

El padre Francesco Bortignon de la comunidad misionera de los scalabrinianos lleva doce años sirviendo a estas comunidades de los barrios de Cúcuta y explica que hay desplazamiento local porque ya la gente se siente amenazada con una mala mirada y prefiere irse a arriesgarse; o porque le cobran ‘vacuna’ y no la puede pagar. Y desde hace un año y medio volvieron a llegar a Cúcuta los desplazados provenientes del Catatumbo, de la guerra del Estado contra la guerrilla. En una semana les están llegando de repente la petición de diez cupos en el colegio de niños que vienen desplazados de otras zonas.

“Los desplazados que recibo cada día son descripciones que dan pena, y le puedo asegurar que el 60 por ciento son lágrimas de miseria”, dice el padre. “¿Cómo puedo estar desplazado desde hace cuatro o cinco meses y un pedazo de papel me dice que me atienden si me enfermo pero soy tan pobre que no tengo ni plata para ir por allá?”

Son varias las entidades que atienden a los desplazados en Norte de Santander. La principal es la antigua Acción Social, que ahora pasó a llamarse Unidad de Víctimas y hace parte de una nueva entidad más grande que se llama Departamento de la Prosperidad Social. El cambio burocrático ha complicado la atención de los desplazados, más cuando en Filo El Gringo, en Motilonia, en Villa del Rosario o en Cúcuta, los que hoy piden ayuda de emergencia ya la habían recibido en años anteriores cuando habían sido desplazados la primera vez. Así por ejemplo, desplazados de El Tarra de enero recién fueron aceptados en el sistema para quedar oficialmente registrados como desplazados en junio. Sin ese registro oficial no tienen acceso a cupos en los colegios, ni dineros de auxilios, ni atención prioritaria en salud.

El gobierno de Juan Manuel Santos anunció a comienzos del año una inversión multimillonaria (el equivalente a unos US\$450 millones) en protección social y mejoramiento de servicios para Norte de Santander. Pero la gente en terreno es escéptica.

Según un informe de gestión de la gerencia para la región del Catatumbo durante el período 2004-2011 se invirtieron 175.000 millones de pesos (US\$97.000) en atención humanitaria, desarrollo económico, desarrollo social, gobernabilidad, justicia y seguridad y ordenamiento de la propiedad. El gobierno nacional no consultó ni con la comunidad ni con los gobiernos locales, cómo invertir esos dineros. Según una fuente conocedora, los oficiales militares estaban muy molestos porque, sabiendo que la consolidación del territorio dependía de la eficacia de la inversión social, la plata se embolataba en manos de contratistas amigos de políticos locales con el visto bueno de funcionarios nacionales. Varios alcaldes y líderes comunitarios hoy se preguntan dónde quedó ese dinero porque la mayoría de la obras no se ven.

Al Estado, que aún no consigue atender y resarcir a las víctimas de antes como debiera, se le siguen presentando nuevas víctimas o las mismas de antes, vueltas a victimizar. En este rincón de Colombia, además, la tragedia es doble, pues al desplazamiento masivo de la vieja guerra que continúa, se le suma otro desplazamiento forzado igualmente cruel, el de las bandas criminales. Y el aumento de los cultivos de la coca en 2011, el crecimiento del desplazamiento forzado en El Tarra en Catatumbo en 2012 y bandas criminales que rápidamente reemplazan a los que han golpeado las autoridades, son malos augurios de que el éxodo forzado de esta frontera caliente va a continuar por muchos años.